

# PARAPOLÍTICA

**La ruta de la expansión paramilitar  
y los acuerdos políticos**

**Mauricio Romero**  
Editor

**Prólogo de León Valencia**

**Serie CONFLICTO Y TERRITORIO**



# Medellín: El complejo camino de la competencia armada

**Manuel A. Alonso Espinal\***

**Jorge Giraldo Ramírez\*\***

**Diego Jorge Sierra\*\*\***

Aunque parezca prematuro efectuar evaluaciones de largo término, el 2005 puede representar una inflexión profunda en el complejo camino de la competencia armada en Medellín<sup>1</sup>. Usamos el término competencia armada con intenciones descriptivas, es decir, para significar un proceso en el que múltiples grupos, con intereses, motivaciones y estrategias diversas, desafiaron las pretensiones de exclusividad, universalidad e inclusividad del Estado en la región, al romper fácticamente el monopolio de la violencia y lograr sostener esa ruptura, continuamente, durante dos décadas.

A lo largo de los últimos 20 años, la ciudad de Medellín ha estado marcada por la presencia de altos niveles de confrontación violenta, que se alternan con momentos de “hegemonía” de algunos de los

---

\* Director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Investigador del grupo Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

\*\* Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Eafit. Investigador del grupo Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y del grupo Estudios Sobre Política y Lenguaje de la Universidad Eafit.

\*\*\* Investigador de Corpades y Secretario Técnico de Asapaz – Antioquia.

<sup>1</sup> En adelante se usará el nombre de Medellín para describir tanto la ciudad como la región geoestratégica de la que hace parte. Esta región incluye los once municipios del Valle de Aburrá, seis municipios del Oriente, cuatro del Occidente, dos del Norte y tres del Suroeste.



competidores armados, y procesos muy heterogéneos de negociación del Estado con algunos de ellos. El fracaso de la estrategia guerrillera de urbanización de la guerra en Medellín (marcado por la Operación Orión de finales del 2002), el protagonismo del Estado central y local con respecto a la seguridad (que se da entre mediados del 2002 y principios del 2003) y la desmovilización de uno de los principales actores del conflicto en la región (expresada en la dejación de armas de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada entre 2003 y 2005), definen un punto de inflexión que se expresa, entre otras cosas, en las tasas de homicidio más bajas de la ciudad desde 1985.

Este texto pretende ser una evaluación de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara -BCN- que produjo, en un principio, la reincorporación a la sociedad de 874 personas, el 25 de diciembre del 2003, en lo que sería el primer episodio de una larga cadena de desmovilizaciones parciales en el marco del inédito proceso de diálogo o negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. La necesidad del análisis y la oscuridad del fenómeno condujeron a los autores de este texto a abandonar los caminos ya explorados en el país. Ello hace que se proponga otra lectura sobre la naturaleza de las AUC y, en especial, del BCN, así como de su trayectoria. Las hipótesis que se exponen resultan, a nuestros ojos, plausibles para explicar los últimos cinco años en la evolución de las AUC y el BCN, y creemos que se confirman en el proceso de desmovilización. Sin embargo, se admite que hay una penumbra, todavía muy extensa, que no permite agotar las preguntas y las discusiones, y que supera la natural limitación de nuestro conocimiento.

### Medellín-siglo XXI: Otra hipótesis para entender el paramilitarismo

El punto de partida de la reflexión que se propone señala que en los análisis que se hacen del fenómeno paramilitar en Colombia es posible identificar dos hipótesis dominantes: en primer lugar, aquella tradicional que, apegada a las teorías de la guerra irregular y los modelos

clásicos de descripción de los ejércitos, lo lee bajo la perspectiva de una organización jerárquica y centralizada que tiene como fin primordial la guerra contrainsurgente. El prototipo de un paramilitarismo que aparecía como un gran ejército nacional contrainsurgente, con un mando único centralizado que lograba controlar y estructurar a los diferentes frentes regionales, probablemente representa una fase del desarrollo de algunos de los principales grupos de autodefensas, y a la imagen proporcionada por el propio Carlos Castaño después de la Primera Conferencia Nacional de Dirigentes y Comandantes de las Autodefensas Campesinas y la consiguiente aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia<sup>2</sup>. El esfuerzo de 1997 y 1998 llevó a que siete grupos de autodefensa, todos ubicados en regiones al norte de Bogotá, se integraran en una sola organización cuya unidad de mando estaba garantizada por la mayoría que las Autodefensas de Córdoba y Urabá -ACCU- tenían en el Estado Mayor<sup>3</sup>. La oscuridad que rodeaba al fenómeno —que hasta ahora sólo había sido documentado oficialmente por la Procuraduría General de la Nación en el período 1982-1986, y académicamente, por Medina Gallego en el caso de Puerto Boyacá<sup>4</sup>—, la imposibilidad física de hacer una lectura que fuera más allá de lo evidente y la imagen unitaria proyectada por las AUC a finales de la década de 1990, amén de la similitud con su contraparte insurgente,

<sup>2</sup> La constitución de las AUC se efectuó en abril de 1997, con la pretensión de definirse como “un movimiento político-militar de carácter antissubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa”. León Valencia, *Adiós a la política, bienvenida la guerra: Secretos de un malogrado proceso de paz*, Bogotá, Intermedio, 2002, pp. 219 - 220.

<sup>3</sup> *Ibíd.*, p. 221. En uno de sus principios constitutivos se decía, sin embargo, que cada organización asumiría “independientemente la responsabilidad de sus respectivas acciones militares”. Véase: Eduardo Pizarro Leongómez, *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Norma, 2004, p. 122.

<sup>4</sup> Carlos Jiménez Gómez, *Una procuraduría de opinión*, Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 1986, pp. 112 -121. Carlos Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Documentos periodísticos, 1990.



dejaron la idea de que el paramilitarismo era una organización político militar contrainsurgente, de carácter nacional, y estructurada a partir de niveles de mando estrictamente jerarquizados y centralizados.

La segunda hipótesis dominante es aquella que, al detenerse en las dinámicas y particularidades del poder regional, entiende el paramilitarismo como un fenómeno político y económico en el cual convergen, incluso conflictivamente, las acciones, intereses y propósitos particulares de varias federaciones armadas ilegales, que tienen hoy como objetivo particular el control territorial de poderes locales y regionales muy específicos; y, como objetivo común, el logro de una negociación que “favorezca la consolidación del dominio alcanzado, el logro de la impunidad para algunas de sus acciones”<sup>5</sup>, y la garantía de la no extradición para algunos de sus miembros. Bajo la perspectiva de esta segunda hipótesis, la unidad del proyecto paramilitar es, simplemente, “un instrumento transitorio con fines de negociación. Como aparato militar carece de relación entre las diferentes estructuras, sus mandos son transitorios; responden más a intereses regionales y algunos casos personales, que a una línea nacional; mantienen la autonomía financiera y operacional de los frentes. De esta manera son una gran organización federada que puede llegarse a coordinar bajo un mismo propósito”<sup>6</sup>.

El trabajo *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*, de Mauricio Romero, mostró la inconveniencia de leer el proceso paramilitar desde el punto de vista tradicional de un gran ejército con una estructura jerárquica y organizada<sup>7</sup>. En sus tesis centrales, este autor señala que la verdadera dimensión del paramilitarismo sólo se puede desentra-

<sup>5</sup> Fernando Cubides, “Santa Fe de Ralito: Avatares e incongruencias de un conato de negociación”, *Análisis Político*, No. 53, Bogotá, Iepri, Universidad Nacional, enero-marzo de 2005, p. 89.

<sup>6</sup> Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: Una aproximación estratégica”, en: Alfredo Rangel (Editor), *El poder paramilitar*, Bogotá, Planeta, Fundación Seguridad y Democracia, 2005, p. 93.

<sup>7</sup> Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*, Bogotá, Planeta, Iepri, 2003.

ñar si se analiza la naturaleza específica y el entorno en el cual actúa cada una de esas federaciones armadas que se han amparado bajo la denominación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde una perspectiva política, de acuerdo con esta segunda hipótesis el paramilitarismo debe entenderse como una federación de agrupaciones con íntimos vínculos con el narcotráfico<sup>8</sup>. En esta misma línea de argumentación, Fernando Cubides afirma, en su texto *Burocracias armadas*, que “hoy en día el organigrama de las AUC [...] tiene la forma de una federación de grupos regionales, y la cadena de incidentes y desautorizaciones a algunos de los comandantes regionales evidencia una articulación débil entre ellos”<sup>9</sup>.

Sin duda, esta interpretación avanzaba en la comprensión del fenómeno paramilitar al cuestionar la posibilidad de unidad política, orgánica y estratégica de grupos que, más allá de su identidad contraguerrillera, tenían orígenes e intereses diversos. Este enfoque correspondía a la etapa que las autodefensas empezaron a vivir desde el 2001, cuando fracasó el proyecto unitario de las AUC de 1997 y se reorganizaron como una estructura confederal. Daniel Pécaut precisa el comienzo de esta fase al señalar que “fue en mayo de 2001 cuando Castaño hizo pública su renuncia y la acción disidente de algunos de sus comandantes”<sup>10</sup>. Esta etapa de disolución y reagrupamiento se da desde ese momento hasta finales del 2002, cuando aparece la “Declaración por la Paz de Colombia”<sup>11</sup> y se produce un nuevo acuerdo en los términos de una estructura confederal.

<sup>8</sup> Sobre esta definición, véase: Mauricio Romero, “La desmovilización de los paramilitares y las autodefensas. Riesgosa, controvertida y necesaria”, en *Síntesis 2004. Anuario Social, Político y Económico*, Bogotá, Fescol-Iepri-Nueva Sociedad, 2005.

<sup>9</sup> Fernando Cubides, *Burocracias armadas*, Bogotá, Norma, 2005, p. 75.

<sup>10</sup> Daniel Pécaut, *Midiendo fuerzas: Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Planeta, 2003, p. 139.

<sup>11</sup> Autodefensas Unidas de Colombia. “Declaración por la Paz de Colombia”. 29 de noviembre, 2002.



A principios del 2003, ya Carlos Castaño podía afirmar que “las AUC son una confederación de grupos y bloques autónomos. Hemos creado un escenario de concertación en el que confluyen todas las AUC, exceptuando dos grupos disidentes”<sup>12</sup>. Sin embargo, los acercamientos con el gobierno se iniciaron bajo el modelo de mesas plurales y paralelas, de acuerdo con la estructura que las AUC habían adoptado de tres grandes federaciones y una constelación de grupos menores. El proceso de recomposición se finiquita, oficialmente, en marzo del 2004 con la conformación de la “Mesa Única Nacional de Negociaciones”<sup>13</sup>. En este punto es importante señalar que la iniciativa de paz creó el marco político para los nuevos lazos de la constelación de grupos de autodefensa del país. Esto lo confirma uno de los comandantes militares del recién surgido Bloque Central Bolívar -BCB- cuando afirma que “las negociaciones de paz han reconstruido lentamente el espíritu de cuerpo, gravemente disperso y fragmentado por circunstancias muy dolorosas del pasado”<sup>14</sup>.

El gran valor de los trabajos de Romero y Cubides es que colocaron la reflexión sobre el paramilitarismo en un lugar en el cual se hace necesario descifrar las formas de estructuración de cada una de las organizaciones armadas. Sin embargo, el modelo interpretativo que subyace a los trabajos de estos dos autores no permite comprender plenamente la naturaleza del BCN, pues en ellos se supone que esa federación armada estaba constituida de manera jerárquica, y más o menos centralizada, sobre unos intereses y objetivos comunes; es decir, estos autores suponen que cada una de las organizaciones federadas actúa como una verdadera burocracia armada, con sujetos regionalmente soberanos y centralizados.

<sup>12</sup> Salud Hernández-Mora, “Carlos Castaño: El Estado sería el primer responsable de la tragedia nacional”, *El Mundo*, Madrid, 5 de febrero 2003.

<sup>13</sup> “Declaración de las AUC al Gobierno Nacional para avanzar en el camino de la Paz en Colombia”, Santa Fe de Ralito, 5 de marzo 2004.

<sup>14</sup> Antonio Sandoval, “Entrevista a Javier Montañez, Jefe del Estado Mayor y Comandante General del Bloque Central Bolívar”, *Revista BCB*, Montañas Sur de Bolívar, No. 4, julio 2003, p. 33.

La intención del presente texto es mostrar que, a la hora de realizar un estudio sobre el BCN, es necesario considerar el fenómeno paramilitar desde un punto de vista diferente, esto es, aquel que remite al concepto de red propuesto por Michael Hardt y Antonio Negri en su trabajo sobre la guerra y la democracia en la era del “Imperio”<sup>15</sup>.

### El Bloque Cacique Nutibara interpretado como red

La hipótesis que se plantea en este texto señala que la comprensión de la verdadera naturaleza del BCN remite a la configuración de una red<sup>16</sup> en la que convergen, de manera controlada y en permanente tensión, los múltiples y variados protagonistas de todas las guerras y de todas las negociaciones adelantadas en Medellín en la década de 1990. De manera mucho más específica, el BCN, más que una federación armada ilegal estructurada jerárquicamente sobre una historia, unos intereses y unos objetivos comunes, es una red, al menos en dos acepciones.

La primera, clásica en la literatura sociológica, define las redes como un conjunto de relaciones. En este caso, el BCN está constituido por ese conjunto de relaciones resultantes de los complejos procesos de aniquilación, negociación, absorción, dominación y contratos derivados de las cuatro grandes rutas de la guerra en Medellín, esto es, la ruta de las autodefensas, la ruta del narcotráfico, la ruta de las bandas y la ruta específicamente paramilitar. Rutas que, en las tramas y en los dramas de cada guerra y negociación, darán forma a distintos nodos específicos de la red.

La segunda acepción asume, con Antonio Negri y Michael Hardt, que lo característico de cualquier estructura reticular es la

<sup>15</sup> Michael Hardt y Antonio Negri, *Multitud: Guerra y democracia en la era del Imperio*, Barcelona, Debate, 2004.

<sup>16</sup> Sobre la aplicación del concepto de red al análisis de la guerra, véase: John Arquilla y David Ronfeldt (editores), *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*, Santa Mónica, Rand Corporation, 2001.



“pluralidad constante de sus elementos [...], de tal manera que no es posible la reducción de ella a una estructura de mando centralizada y unificada”<sup>17</sup>. Se puede afirmar, entonces, que, en el caso del BCN, esta pluralidad remite a los variados orígenes, configuraciones, estrategias y composiciones sociales de cada uno de los siguientes nodos:

- a) El nodo de las autodefensas urbanas, representado por la crisis y metástasis de los grupos milicianos.
- b) El nodo del narcotráfico, representado por la figura de Adolfo Paz y los comandos armados al servicio del negocio de las drogas ilícitas.
- c) El nodo de las bandas.
- d) El nodo esencialmente militar y contrainsurgente, representado por el desaparecido Bloque Metro y los núcleos de guerrillas campesinas provenientes, de manera individual o colectiva, de diversos frentes del ELN con presencia en Antioquia (Nordeste y Oriente, especialmente).

Al enunciar las diferentes rutas que convergen para dar forma al BCN, lo que se está intentando afirmar es que la descripción de su naturaleza sólo se puede llevar a cabo, en primer lugar, a través de la realización de una taxonomía de las modalidades y manifestaciones del conflicto en la ciudad, en la última década del siglo pasado; y, en segundo lugar, a través de la formulación de un conjunto de hipótesis que puedan explicar por qué confluyeron todas estas rutas en el proyecto más o menos hegemónico que da forma a la red que se autodenomina BCN. En lo que sigue de este apartado se presentarán algunos aspectos fundamentales de cada uno de esos nodos.

#### *Autodefensas urbanas: De la autonomía a la subordinación*

El primer nodo, el de las autodefensas, hace referencia al surgimiento, transformación, negociación y subordinación de la

<sup>17</sup> Michael Hardt y Antonio Negri, op.cit., p. 111.

experiencia miliciana en la ciudad. Esto remite a la conformación de grupos armados en la década de 1970, explicada como una respuesta comunitaria a la delincuencia y a la débil acción estatal para controlarla<sup>18</sup>, así como a su posterior transformación en organizaciones de milicias en la segunda mitad de la década de 1980, cuando aparecen expresiones ideológicas y transferencias del discurso guerrillero, asociadas a nociones más deliberadas de control territorial<sup>19</sup>. La acción de exmilitantes de las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL constituyó un factor importante en esta transformación, mientras los intentos de construir una milicia asociada a los proyectos nacionales del M-19 y el ELN tuvieron un éxito menor. Dicho proyecto encontró unas condiciones sociales favorables para su fortalecimiento en zonas marginales de la ciudad, como consecuencia de la endémica ausencia estatal, el crecimiento acelerado de las bandas al servicio del narcotráfico y la consecuente demanda ciudadana de seguridad en un marco de violencia creciente<sup>20</sup>.

A pesar de las múltiples variaciones existentes en términos de su estructura organizativa, de sus estrategias y de su relación con movimientos insurgentes, resulta más o menos claro que el fenómeno miliciano estuvo ligado, en sus comienzos, a iniciativas de autodefensa societal y barrial frente a los crímenes cometidos por los delincuentes y las bandas en los barrios. En un contexto marcado por la irrupción de

<sup>18</sup> Alberto Granda Marín e Iván Darío Ramírez, *Contexto general de la violencia en Medellín*, Medellín, UPB, Marzo 20 de 2001.

<sup>19</sup> Ana María Jaramillo, “Milicias populares en Medellín: Entre lo privado y lo público”, *Revista Foro*, Bogotá, noviembre de 1993.

<sup>20</sup> A principios de los 90 se inició una disputa por territorios en los barrios populares, entre grupos armados al servicio de la delincuencia y grupos milicianos independientes. Esta situación, unida a la masificación del narcotráfico, llevó a que en 1991 y 1992 se registrara la mayor tasa de homicidios en la ciudad: 444 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín. Sobre el origen de las milicias en Medellín véase: Alonso Salazar, Paolo Costelo y Néstor Alonso López, *Memorias de la historia y el proceso de paz de las milicias populares de Medellín*, Medellín, mimeo, 1998.



formas delincuenciales asociadas a la rápida proliferación de bandas, la oferta de seguridad y control que subyacía al proyecto miliciano tuvo un crecimiento vertiginoso a principios de la década de los años 1990, de tal forma que el experimento que empezó con un solo grupo en 1988 se multiplicó hasta llegar a diez grupos en 1993<sup>21</sup>, año en el cual comienza a evidenciarse una profunda crisis de este modelo de control social.

Aquí interesa destacar, solamente, que a mediados de la década de 1990 se evidencia una profunda fragmentación de los grupos milicianos. Ésta se manifiesta en la clara diferenciación que se establece entre las organizaciones que se reclamaban como típicas formas de autodefensa barrial y aquellas otras que estaban ligadas a estructuras armadas de las guerrillas. Las primeras, que están relacionadas con el primer momento de auge de las milicias, establecieron acuerdos con los gobiernos municipal y nacional para desmovilizarse en 1994 y 1998<sup>22</sup>. Las segundas, vinculadas a la expansión del proyecto guerrillero en la ciudad a partir de 1997, serán aniquiladas, desplazadas o absorbidas como consecuencia de la consolidación del proyecto paramilitar y el despliegue de la Operación Orión en la Comuna 13, en el mes de octubre del 2002.

<sup>21</sup> Estos grupos eran: Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Pueblo Unido, las Milicias Ché Guevara y las Milicias Obreras 1º de Mayo, todas ellas de carácter autónomo; las Milicias Populares del Valle de Aburrá y las Milicias 6 y 7 de Noviembre, con influencia del ELN; las Milicias América Libre y las Milicias Populares Revolucionarias, con influencia de la Corriente de Renovación Socialista; las Milicias Bolivarianas, con influencia de las FARC; los Comandos Obreros Populares, con influencia del EPL. Véase: Ana María Jaramillo. *Milicias Populares en Medellín: Entre la guerra y la paz*. Medellín, Corporación Región, 1994.

<sup>22</sup> En 1994 los acuerdos fueron firmados por las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín. Los acuerdos de la Corriente de Renovación Socialista, el mismo año, incluyeron a un grupo miliciano de la comuna de Aranjuez. En 1998 se firma el acuerdo con el MIR-COAR.

Este primer nodo tiene su fuente principal de hombres armados, en los años 1990 y comienzos del presente siglo, en el fenómeno de los combos, es decir, pequeños grupos claramente territoriales (por cuadradas o barrios) cuyo tamaño puede llegar hasta los 30 miembros, con reconocimiento en la zona donde se ubican y una mínima jerarquía<sup>23</sup>. Su actividad oscila entre la autodefensa, la autofinanciación y los servicios prestados a terceros. La Alcaldía de Medellín ha estimado, para diciembre 31 de 2004, que en la ciudad existían 201 grupos de este tipo con un total de 6.030 integrantes<sup>24</sup>.

### *El aparato armado del narcotráfico*

El segundo nodo, el del narcotráfico, hace referencia a la irrupción, reestructuración y pervivencia de este fenómeno en la ciudad. Para los fines de este texto interesa señalar, simplemente, que el proceso violento que vivió la ciudad de Medellín en los años 1980 estuvo aparejado con el proceso de consolidación del narcotráfico, y con la puesta en marcha de unos aparatos de violencia que tenían como finalidad asegurar la eficacia de las diversas transacciones ilegales y la elaboración de su propia normatividad, característica de toda estructura mafiosa. Pasando por alto todas las periodizaciones pertinentes, se puede afirmar que los hechos más relevantes de la puesta en marcha de estos aparatos de violencia ligados al narcotráfico fueron la irrupción del sicariato y la proliferación de bandas, el surgimiento de escuadrones de la muerte, la creación de comandos para tareas altamente especializadas del momento “narcoterrorista”, la conformación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar -Pepes- y la secuela de reorganización del aparato mafioso de seguridad alrededor de las oficinas.

<sup>23</sup> Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, “Actores primarios del conflicto armado”. Medellín, mimeo, 2004.

<sup>24</sup> Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, “Avances del proceso”, Medellín, mimeo, 24 de enero 2005.



Tal como ha sido documentado en numerosos estudios, los sicarios surgieron como matones ligados al fenómeno de la economía ilegal del negocio de los narcóticos. En un primer momento, realizaban acciones que no desbordaban el campo creado por el negocio y ejercían, por tanto, una violencia selectiva, interna y circunscrita al ámbito económico de su contratante<sup>25</sup>. Sin embargo, la acción de los sicarios se amplió en la medida en que el ámbito del narcotráfico se extendió a otros campos de la vida de la ciudad. El crecimiento y consolidación social del narcotráfico crearon ciertas necesidades que, por extensión, implicaban una ampliación del área de acción del sicario, de tal suerte que “surge una violencia mayor dirigida contra la sociedad, el político, el juez, el policía o el periodista”<sup>26</sup>. Con la consolidación del sicariato se transformaron las modalidades de la acción violenta, se fortaleció la organización de bandas y se dio inicio a las múltiples guerras por el control territorial de los barrios de Medellín.

En el contexto de este conjunto de guerras, que van perfilando cierta fisonomía para la inserción del paramilitarismo en la ciudad, se debe hacer mención al surgimiento de los “escuadrones de la muerte”, que, para la época, ya realizaban acciones de “limpieza social”. Además, hay que reseñar la conformación del grupo Muerte a Secuestradores -MAS-, auspiciado por los barones del narcotráfico luego del secuestro de Martha Nieves Ochoa por parte del movimiento insurgente M-19. La característica básica de estas modalidades de actuación armada fue la operación bajo el modelo de *comando*; es decir, un accionar clandestino, sorpresivo y retaliatorio que no implicaba organicidad permanente, propuesta política o disputa y control territorial.

Finalmente, en la elaboración de esta breve taxonomía del nodo del narcotráfico y su papel en la configuración del BCN, es importante

<sup>25</sup> Véase: Julio Jaramillo Martínez y Diego Alejandro Bedoya Marín, “Ensayo interdisciplinario sobre el sicariato”, en: *Violencia juvenil: Diagnóstico y alternativas. Memorias del seminario sobre la Comuna Nororiental de Medellín*, Medellín, Corporación Región, 1990.

<sup>26</sup> *Ibíd.* pp. 19-20.

mencionar la conformación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar y el surgimiento de las oficinas. En el marco de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, y en estrecha relación con las disputas internas por los mercados, surge el denominado grupo de los Pepes, cuyo objetivo fundamental fue liquidar militarmente a personas ligadas a la estructura del Cartel de Medellín y propiciar la caída de Escobar. El cumplimiento de este objetivo y la confluencia en dicha organización de los hermanos Castaño Gil, las Autodefensas del Magdalena Medio, los narcotraficantes ligados al grupo disidente de los Galeano y los Moncada, los organismos de seguridad del Estado y los jefes del Cartel de Cali, tienen enormes consecuencias sobre la evolución del conflicto en la ciudad. Podemos enunciar cuatro efectos fundamentales: en primer lugar, estos hechos marcaron el fin de los grandes carteles y permitieron el surgimiento de estructuras mafiosas más ágiles y estructuradas operativamente a través de la configuración de redes. A partir de este momento, los grupos dedicados al negocio ilegal de las drogas se atomizaron pero, en una acción propia de un negocio que no puede sostenerse con formas microempresariales, también se coordinaron en redes menos jerárquicas y visibles que tenían como finalidad garantizar la eficacia de la acción comercial y violenta. En segundo lugar, se posibilitó la consolidación de las oficinas que operan, desde una lógica que mezcla las dinámicas mafiosas y empresariales, como estructuras de criminalidad organizada con una alta capacidad para controlar y regular los negocios ilegales y eliminar o absorber a los competidores armados existentes<sup>27</sup>. En tercer lugar, se creó una suerte de retícula en la cual se vinculaban, al parecer por primera vez, Adolfo Paz (en ese

<sup>27</sup> La descripción de las oficinas, según Doblezero, jefe del aniquilado Bloque Metro, es la siguiente: “Berna siguió con el esquema de la oficina inventado por Pablo, que no es sino como la oficina de quejas y reclamos, o la Fiscalía de los narcotraficantes, en la cual siguiendo ciertas normas existentes en las mafias, se arreglan los problemas e inconvenientes generados del negocio con el pago de un porcentaje de un 30% de los intereses en juego, a el Nato Don Berna”. Frente Urbano Rafael Uribe Uribe, Bloque Metro. “La corrupción; de la normalidad a la anormalidad”. s.f., p. 4.



entonces Don Berna) y los hermanos Castaño Gil; y, en cuarto lugar, se dio lugar a una expansión, más o menos controlada, de las bandas presentes en la ciudad, y se amplió la oferta de organizaciones armadas dispuestas a vender sus servicios al mejor postor.

La experiencia de la lucha contra Pablo Escobar, localizada en la ciudad de Medellín, no debe subestimarse pues redefinió el desarrollo de la guerra, el narcotráfico y la mafia en la ciudad<sup>28</sup> y representó, de hecho, la primera articulación clara de grupos mafiosos, autodefensas rurales, paramilitares propiamente dichos y elementos de la fuerza pública alrededor de un mismo objetivo militar, aunque con diferentes intereses estratégicos.

### *Bandas: De la dispersión a la subalternidad*

El tercer nodo, el de las bandas, hace referencia a la presencia ininterrumpida de grupos armados asociados a la criminalidad organizada. Las bandas son un fenómeno que se puede concebir como una extensión de la criminalidad urbana tradicional, con unas lógicas territoriales, económicas y políticas diferentes. Una descripción global de la historia de esas bandas permite identificar dos grandes momentos en este fenómeno. El primero estaría marcado por la irrupción vertiginosa de este tipo de organizaciones a partir de la segunda mitad de la década de 1980. Algunos estudios señalan que entre 1985 y 1990 se conformaron aproximadamente 153 bandas en el Valle del Aburrá, la mayoría vinculadas a los circuitos delictivos generados por el Cartel de Medellín. El punto de inflexión se presenta en los primeros años de la década de 1990, como consecuencia de la desarticulación del Cartel de Medellín y la consolidación del proyecto miliciano en la ciudad<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Véase: Juan Carlos Garzón, op. cit., p. 63 y 64.

<sup>29</sup> A principios de los años 1990, se inició una disputa por territorios en los barrios populares entre grupos armados al servicio de la delincuencia y grupos milicianos independientes. Esta situación, unida a la masificación del narcotráfico, llevó a que en 1991 y 1992 se registrara la mayor tasa de homicidios en la ciudad: 444 por cada 100.000 habitantes.

El segundo momento, que va de 1995 al 2000, está marcado por una fuerte recomposición de la delincuencia. Dos aspectos se deben destacar. En primer lugar, la autonomización de la gran mayoría de las bandas respecto a las estructuras del narcotráfico. Éstas ya no figuran más como apéndices de las estructuras mafiosas, sino que comienzan a operar como microempresas armadas con capacidad de vender sus servicios al mejor postor. El segundo aspecto es la aparición de grandes estructuras del crimen organizado con capacidad de operar como intermediarios entre el mundo de las oficinas y el mundo de las bandas. La Terraza, La Cañada, la banda de los Triana, la banda de Frank y grupos de sicarios, como los Chiquis, constituyen los ejemplos más significativos de este tipo de estructuras armadas. El hecho más representativo es el fortalecimiento de la presencia guerrillera y paramilitar en la ciudad, que conduce al sometimiento de estos grupos delictivos a la dinámica regional del conflicto armado, articulando así prácticamente todas las expresiones violentas de Medellín. Probablemente, el bajo número de actores calificados como bandas a finales del 2004 (15 con un promedio de 10 miembros cada una<sup>30</sup>) represente una mimetización o reciclaje de muchos de sus miembros en estructuras primarias de los ejércitos irregulares que disputaban la hegemonía militar en la ciudad.

### *La contrainsurgencia social y paramilitar*

El último nodo, el de las estructuras militares rurales, se relaciona con a la irrupción de la contrainsurgencia en la ciudad, en sus dos variantes: la originada en la autodefensa campesina de estructura guerrillera y la originada en la estrategia propiamente paramilitar. Aunque Medellín ha sido durante 40 años centro logístico de guerrillas y autodefensas, el momento importante en este análisis es la aparición del Bloque Metro de las AUC en 1997. La ofensiva paramilitar en Medellín

<sup>30</sup> Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. "Actores primarios del conflicto armado".



coincide temporalmente con la realización de la Primera Conferencia de las AUC en 1997, y obedece a una estrategia deliberada proveniente de un centro nacional de mando que sigue el clásico movimiento guerrillero del campo a la ciudad. En consonancia con la intención de la guerrilla de urbanizar y escalonar el conflicto, y respondiendo al proceso de posicionamiento y consolidación de las milicias de las FARC y el ELN en algunos sectores de la ciudad, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACCU, comienzan a plantear la necesidad de crear los Grupos de Autodefensa Urbana -Grau. La materialización de esta idea en Medellín se dará con el traslado de combatientes rurales formados en las subregiones del Nordeste y oriente antioqueños, y con la aparición oficial del Bloque Metro, bajo la comandancia de Carlos García Fernández, Rodrigo Franco o Doblezero, antiguo capitán del ejército y hombre de la elite de las AUC.

Un hito de esta ofensiva en el oriente antioqueño es la masacre de 14 campesinos en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, el 3 de mayo de 1997<sup>31</sup>. A éste siguieron una serie de ataques a la población civil en Marinilla, El Retiro y La Ceja, que desafiaban la presencia guerrillera en la zona de los embalses y rompían los corredores de las FARC y el ELN para conectar al Oriente con Medellín. La disputa armada por la hegemonía condujo pronto a que la región de Medellín se convirtiera en la más violenta de Antioquia, y luego del país, y produjo una reversión en la tendencia de la tasa de homicidios que venía descendiendo desde la muerte de Escobar. Para el momento culmen de este enfrentamiento, en el 2002, la región de Medellín presentaba el 81% de los homicidios, el 93% de las masacres y el 70% de los secuestros de Antioquia<sup>32</sup>. En ese entonces, según las autoridades militares, Antioquia concentraba el 25% de las acciones armadas vinculadas al conflicto nacional.

<sup>31</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998, Bogotá, Kimpres, 2001, p. 19.

<sup>32</sup> Gobernación de Antioquia, Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano, "Informe de orden público", 31 de diciembre 2002.

Este nodo quedaría incompleto si no se diera cuenta de la transferencia o deserción de efectivos que se produjo de los grupos guerrilleros FARC y, especialmente, ELN hacia las estructuras de las AUC. Esta transferencia, masiva para los casos del Nordeste, oriente y Medellín, tuvo incluso expresiones grupales, como cuando la masacre de Machuca —originada por una acción de sabotaje del ELN contra un oleoducto— motivó el paso de una estructura completa de esa guerrilla hacia las AUC. Este fenómeno, denominado por María Teresa Uribe de "porosidad y flujo" entre actores armados<sup>33</sup>, ya tenía antecedentes en el amplio reclutamiento que las AUC hicieron entre desertores de las FARC y reinsertados del EPL, en Urabá y Córdoba, a comienzos de los años 90.

En su estructura básica, el Bloque Metro fue una organización contrainsurgente típicamente rural que desarrolló una estrategia de copiamiento territorial siguiendo el modelo guerrillero, en combinación con una estrategia de terror contra la base social de sus contendores armados. Su estrategia fue exitosa en el período 1997-2000, cuando se trazó como tarea principal la disputa por Medellín, en el marco de un escalamiento de la guerra en el país y de un intento de todos los actores armados por urbanizarla. Para el logro de este objetivo se apoyó en algunas de las cooperativas de seguridad "Convivir" existentes en la ciudad, y desarrolló una estrategia de guerra orientada, en primer lugar, a golpear, aniquilar o absorber a los grupos milicianos que respondían al modelo típico de las autodefensas, y, en segundo lugar, a someter y aprovechar a algunas de las bandas presentes en la ciudad.

El Bloque Metro desplegó en Medellín un proyecto de ejército claramente contrainsurgente, bajo el modelo de formas organizativas propias de ejércitos rurales consolidados. Sin embargo, por las especificidades del entorno urbano, en su estrategia de copiamiento

<sup>33</sup> María Teresa Uribe, "Antioquia: entre la guerra y la paz en la década de los 90", *Estudios políticos*, No. 10, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio de 1997, p. 132.



de la ciudad desarrolló ampliamente una modalidad de subcontratación, especialmente con organizaciones de alta capacidad operativa como la banda de la Terraza, que para la época tenía la capacidad armada para funcionar como centro de coordinación de una parte importante de la delincuencia en la ciudad. En esta combinación de lógicas de acción inscritas en el marco del proyecto contrainsurgente y lógicas de acción propias del mundo de la delincuencia organizada, el Bloque Metro se encontró con la realidad impuesta por las oficinas<sup>34</sup> y sus redes mafiosas, y no tuvo más opción que establecer cierto equilibrio inestable sustentado en la intermediación, ejercida a través de lógicas mafiosas y delincuenciales por la banda de la Terraza<sup>35</sup>.

Las confrontaciones que subyacen a todas las organizaciones delincuenciales que operan en mercados ilegales, más o menos monopolizados, enfrentaron a La Terraza con sectores vinculados a las oficinas, con los frentes paramilitares liderados por Carlos Castaño Gil, y, por supuesto, con la fuerza pública. Esta confrontación rompió con ese equilibrio inestable sobre el cual se sustentaba la acción del Bloque Metro e hizo fracasar la estrategia de urbanización del conflicto bajo el modelo de copamiento territorial a través de la acción armada de una organización contrainsurgente típicamente rural.

En el contexto general del desarrollo de la guerra contrainsurgente de las AUC a nivel nacional, la opción para invertir este fracaso fue la apelación, mediante la concesión de franquicias, a aquellas estructuras que tenían una verdadera capacidad de establecer un proyecto más o menos hegemónico de control social en la ciudad, esto es, las oficinas y los sectores armados del narcotráfico articulados

<sup>34</sup> Entre ellas sobresalen la oficina de Envigado y la oficina de La Floresta.

<sup>35</sup> En su texto, Juan Carlos Garzón afirma: "La Terraza, banda conformada desde la época de Pablo Escobar y con asiento en la Zona Nororiental, sobrevivió a la persecución del capo y se convirtió en la garantía número uno del nuevo cartel. Su poder se extiende desde 1994 y en 1997 se constituye como la principal organización armada de la ciudad con más de 200 miembros". Véase: Juan Carlos Garzón, op. cit., p. 64.

a ellas, consolidando así una estructura de carácter reticular. Las estructuras reticulares del narcotráfico aparecían, a los ojos de las AUC y aliados, como la única organización armada con capacidad de crear las condiciones para acercarse a ese control hegemónico:

- a) Podía enfrentar el copamiento que las FARC habían realizado de varias áreas de la Comuna 13 con guerrillas movilizadas desde el oriente y el occidente antioqueños.
- b) Podía subordinar o aniquilar a las milicias de las FARC, el ELN, a los CAP y a las Milicias 6 y 7 de Noviembre en la Comuna 8.
- c) Podía enfrentar a las bandas de Frank y los Triana, y contratar y controlar a las otras bandas presentes en la ciudad.
- d) Y podía enfrentar militarmente, con el apoyo de los hombres del Bloque Central Bolívar, al Bloque Metro. Es decir, este camino aparecía como el más eficaz para responder al reto de la urbanización del conflicto y disputar la hegemonía sobre Medellín a la alianza guerrillera y miliciana que se estaba estableciendo. Es en este contexto que surge el denominado BCN en el año 2001.

### La dinámica de encuentro de todos los nodos

Retomando las experiencias de los anteriores movimientos armados ilegales que tuvieron presencia en la ciudad, y asimilando los resultados de todas las guerras y de todos los procesos de negociación adelantados por ellos, el BCN apeló a las redes mafiosas de las oficinas y el narcotráfico para desplegar una estrategia de dominio territorial que le permitiera lograr el monopolio de la coerción en aquellos espacios donde operaban milicias o bandas. La adquisición de este monopolio se convierte en una herramienta central para copar los mercados de seguridad, proteger las actividades relacionadas con la economía ilegal, invertir en actividades legales, que son susceptibles de ser controladas por el crimen organizado e insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y contención política.



Con excepción del primero de los cuatro objetivos señalados antes, el BCN logró rápidamente cumplir con su cometido. La tarea más compleja fue la práctica aniquilación del Bloque Metro en el 2003, que contó con la participación desde el Nordeste del Bloque Central Bolívar<sup>36</sup>. Según el comandante de este bloque, en “4 meses de hostilidades”, entre junio y septiembre, se habían producido “más de 400 muertos”<sup>37</sup>. La batalla decisiva se produjo en San Roque (Antioquia), y dejó como saldo el mayor desplazamiento de campesinos producido en el país en el 2003. En el mismo mes de septiembre, según versiones periodísticas, ya el Bloque Metro había “perdido el control de 37 de los 45 municipios que manejaba en Antioquia”<sup>38</sup>.

El resultado final es la desaparición del Bloque Metro, la subsiguiente actividad propagandística de Doble Cero, su antiguo comandante, hasta su asesinato en el 2004, y el traspaso de un grueso contingente de sobrevivientes hacia el BCN. Así, éste reemplaza al Bloque Metro como estructura de guerrilla rural con su área de operaciones en las zonas del Nordeste y el Oriente cercano, y como inédito grupo “hegemónico” y único actor nacional de la guerra en Medellín. Aunque la nueva red mantiene el nombre de BCN, entre el 2003 y el 2004 se producen tres movimientos internos, uno fugaz, y otro que permaneció hasta la desmovilización. El primero fue el lanzamiento del BCN, ya no como conjunto de la estructura, sino como una parte del conjunto de la red —sin duda, integrada por nodos menores—,

<sup>36</sup> Al explicar la confrontación entre las AUC y el Bloque Metro, Juan Carlos Garzón señala que “en el año 2002, hombres al mando de Doble Cero mataron a dos importantes miembros del Bcb [...] Esto comenzó a crear asperezas al interior de la organización paramilitar, que se incrementaron con el rechazo a la negociación por parte de Rodrigo y sus reiteradas denuncias acerca de las relaciones entre autodefensas y narcotráfico”. *Ibíd.*, p. 90.

<sup>37</sup> Movimiento Campesino Bloque Metro, “Carta abierta a la Honorable Representante Rocío Arias”, mimeo, sin fecha, [www.bloquemetro.org](http://www.bloquemetro.org). Entre mayo y septiembre de 2003 se presentaron choques armados en Medellín, Amalfi, La Ceja, Santa Bárbara, Segovia, Santuario, Santo Domingo, Yalí y San Roque.

<sup>38</sup> “El exterminador de las Auc”, *El Tiempo*, 28 de septiembre 2003.

destinada a convertirse en prueba piloto de la desmovilización, bajo la iniciativa de Adolfo Paz y sin un respaldo expreso o entusiasta del Estado Mayor de las AUC. El segundo fue el intento frustrado de usar otra parte de la red —conformada por exguerrilleros del ELN— para iniciar otra desmovilización, esta vez fingiendo que se trataba de una estructura actual de esa agrupación guerrillera<sup>39</sup>. El tercero, el uso de la denominación Héroes de Granada para cubrir otra parte de la red con operaciones en toda la región (Valle de Aburrá, Nordeste y oriente).

A través del desarrollo de múltiples guerras y de complejas negociaciones, las redes mafiosas existentes en la ciudad de Medellín triunfaron sobre los reductos milicianos, las bandas y el Bloque Metro, y lograron crear una estructura reticular que articuló como nodos a los diferentes reductos formados por cada uno de estos sectores. Esta hipótesis se puede constatar si se mira detenidamente la procedencia de los 749 miembros desmovilizados del BCN, según su participación previa en alguna organización armada. De acuerdo con el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, el 0,53% de los desmovilizados provenía de las guerrillas, el 9,48% del ejército, el 37,38% de bandas, el 4,54% de otros frentes paramilitares y el restante 48,1% señalaba que no procedía de una organización previa. Si se asume que antes de la desmovilización gran parte del ala militar del BCN y un sector importante de integrantes de las oficinas se integraron al Bloque Héroes de Granada, y que una parte importante de ese 48,1% son sectores vinculados a las estructuras armadas de la economía ilegal (dominantemente de narcóticos), entonces es posible afirmar que la presencia de los sectores procedentes de las milicias y de otros

<sup>39</sup> Se trata de “58 hombres y mujeres armados, que hasta hoy pertenecemos al Frente Carlos Alirio Buitrago, decidimos en las montañas del Oriente Antioqueño separarnos de la estructura del ELN y conformar el Frente Ricardo Lara Parada, en honor a ese revolucionario masacrado por las armas asesinas del Comando Central”. Texto de la carta enviada por el Frente Ricardo Lara Parada, al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a la Unión Europea y a la Iglesia Colombiana. Junio 2004.

<sup>40</sup> Romero, op. cit., p. 26.



frentes paramilitares es mucho mayor. Estas cifras, con su relativa imprecisión, permiten sacar algunas inferencias sobre la multiplicidad de actores que convergen en la estructura reticular del BCN.

Antes de continuar con la descripción del BCN y su estructura reticular, es necesario realizar una breve digresión para mostrar lo que acontecía en las AUC cuando emergió el BCN.

### Transformación de las AUC y aparición del Bloque Cacique Nutibara

¿Qué pasa en los cerca de 20 meses que trascurren entre la noticia de la crisis interna de las AUC y la “Declaración por la Paz de Colombia”? Al menos cuatro fenómenos distintos, pero estrechamente relacionados, ocurrieron en este período: (a) el crecimiento acelerado del número de combatientes, (b) la búsqueda de soluciones al problema de la presencia del narcotráfico, (c) la recomposición de la estructura interna y la aparición de nuevos frentes, y (d) la recomposición del mando.

Diferentes estimativos permitirían afirmar que entre la Primera Conferencia de 1997 y la constitución de la “Comisión exploratoria de paz” por parte del gobierno nacional para procurar acercamientos con las AUC, éstas habrían casi quintuplicado sus fuerzas. Romero estima que, entre 1997 y el 2000, las AUC habían multiplicado por dos el número de sus efectivos pasando de 4.000 a 8.000<sup>40</sup>. Carlos Castaño aseguraba, ya en el 2003, de cara a una probable desmovilización, que el número de hombres armados era de 18.000<sup>41</sup>, lo que en su momento parecía una sobreestimación propia del forjeo en las negociaciones, pero que las desmovilizaciones en curso confirman con creces. El balance del Informe Nacional de Desarrollo Humano para el 2002 reseña la existencia de 22 grupos paramilitares distribuidos en 28 departamentos<sup>42</sup>, lo que significa

<sup>41</sup> Carlos Castaño Gil, “Qué pasaría si se frustra el proceso de desmovilización de las Autodefensas”, en: [www.accubec.org](http://www.accubec.org), 3 de septiembre 2003.

<sup>42</sup> PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: *El conflicto, callejón con salida*, Bogotá, PNUD, 2003, p. 60.

que en seis años los frentes de las autodefensas se habían triplicado y la cobertura departamental había crecido cuatro veces.

Cuando se constituyeron las AUC el problema del narcotráfico ya estaba presente en la guerra colombiana, hasta el punto que dos de los principios fundacionales de las AUC se refieren al tema. Específicamente, en el punto cuarto se anunciaba el compromiso de “no involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico”, y, en el punto octavo, se afirmaba que “cualquiera de las Fuerzas Aliadas que resultara involucrada con el narcotráfico asumiría sus responsabilidades independientemente del Movimiento Nacional”<sup>43</sup>. Todo indica que los sucesos ocurridos durante este período condujeron a una revisión del problema, iniciada por Carlos Castaño, con acusaciones por narcotráfico sobre varios comandantes y frentes de las AUC<sup>44</sup>, entre ellos los comandantes del BCB<sup>45</sup>. Aunque la solución final del problema rechazó el deslinde pedido por Castaño y admitió que los ingresos del narcotráfico eran indispensables para financiar la guerra, éste continuó caracterizando a las AUC como una fuerza penetrada por el narcotráfico, unas veces a través de generalizaciones, por ejemplo cuando afirmó que “la guerra entre guerrillas y autodefensas se ha convertido en un hábitat para el narcotráfico”<sup>46</sup>; otras, a través de la construcción de análisis sobre su degradación: “[las] Autodefensas combaten el terrorismo de las FARC sí, pero también se convirtieron en una nube oscura donde se ocultan: la corrupción nacional, el narcotráfico, las anarquías y los feudos locales y otras actitudes criminales como el hurto del petróleo, el mercenarismo y las de su especie. La penetración del narcotráfico y la entrada de mercenarios de diferente índole, pro-

<sup>43</sup> Eduardo Pizarro Leongómez, op. cit., p. 122.

<sup>44</sup> Daniel Pécaut, op. cit., p. 140.

<sup>45</sup> “C. Castaño responde al Bloque Bolívar”, *El Colombiano*, Medellín, 10 de octubre 2003.

<sup>46</sup> Carlos Castaño Gil, “Por qué le conviene al País la desmovilización de las AUC. Dificultades de un proceso de paz”, en: [www.accubec.org](http://www.accubec.org), 4 de agosto 2003.



vocó esta terrible situación en las Autodefensas”<sup>47</sup>. En sus últimos meses de vida, Castaño, de manera directa, expresa: “Señor Julián Bolívar. No fue [sic] precisamente pasional nuestras relaciones en las autodefensas, como hablar de diferencias por carácter y temperamentos. Le recuerdo: sólo fue una la razón de la separación de ustedes de las AUC: mi lucha contra el narcotráfico. Por eso el choque conmigo. Jamás aceptaré que se invoque la causa política de la Autodefensa para que salga barato el sostenimiento de un aparato económico ilícito”<sup>48</sup>.

La disputa interna no dejó indemne a las AUC. El primer resultado de ella fue el fraccionamiento del grueso de la tropa en tres grandes bloques: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, establecidas desde 1994 pero ahora con presencia nacional y una amplia estructura federal; el Bloque Central Bolívar -BCB- con casi 30 frentes en 11 departamentos; y el Bloque Oriente en Casanare y Meta. El segundo resultado fue la declaración de rebeldía de los bloques Élmer Cárdenas y Metro de las ACCU contra su mando, con la anuencia de Carlos Castaño, según muchos indicios. El tercero fue el enfrentamiento entre grupos de autodefensa que iría a definir el adentro y el afuera en la nueva configuración de las AUC, y que se expresó entre 2001 y 2003 en cuatro guerras. Dos de éstas tuvieron dimensiones importantes, con cerca de un millar de muertos cada una, entre el Bloque Centauros de las ACCU y las Autodefensas Campesinas del Casanare; la otra, librada por el BCB y el BCN contra el Bloque Metro en Antioquia. Las otras dos fueron más pequeñas: una ordenada por la Dirección del BCB contra el Frente Isidro Carreño en el Magdalena Medio santandereano; una más por la Dirección de las AUC contra el grupo de Hernán Giraldo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es en este contexto que aparecen por primera vez en

<sup>47</sup> Carlos Castaño Gil, “Qué pasaría si se frustra el proceso de desmovilización de las Autodefensas”, [www.accubec.org](http://www.accubec.org) 3 de septiembre 2003.

<sup>48</sup> “C. Castaño responde al Bloque Bolívar”, *El Colombiano*, Medellín, 10 de octubre 2003.

el organigrama de las AUC algunas de las estructuras que han sido señaladas por las autoridades y diversos comentaristas de provenir de las huestes del narcotráfico, por ejemplo, el BCN y el Bloque Vencedores de Arauca que comanda Pablo Mejía<sup>49</sup>.

Estos sucesos se van a reflejar, desde luego, en cambios drásticos en la estructura dirigente de las AUC. La renuncia de Carlos Castaño a su jefatura en el 2001 es resuelta en una cumbre de junio de ese año, con la creación de una dirección colegiada, repartiendo la dirección política entre Castaño y Ernesto Báez del BCB, y trasladando la dirección militar a Salvatore Mancuso. Después de la muerte de Carlos Castaño, en abril del 2004, esa dirección tendría una morfología todavía más plana. Sin embargo, el paso más espectacular fue la aparición sin antecedente inmediato de Adolfo Paz —el antiguo Don Berna aliado de los hermanos Castaño Gil en la guerra contra Pablo Escobar— como Inspector General de las AUC, en principio, y aparentemente, sin mando sobre combatientes. Sólo cuando los acercamientos entre las AUC y el gobierno nacional a principios del 2003 empezaron a realizarse, la presión pública sobre la figura de Adolfo Paz se hizo sentir hasta el punto de que el nuevo mando —aún con la presencia de Carlos Castaño— dedicó buena parte de sus esfuerzos diplomáticos a avalar la presencia de este personaje en sus filas. La manifestación más dicente fue una carta abierta que tenía como destinatarios al Presidente de la República y al Alto Comisionado de Paz, en la que se rechazaban “las falsas imputaciones que se están haciendo a la persona del Comandante Adolfo Paz, en quien reconocemos un hombre íntegro, probo y al servicio de la causa de la paz en el país”<sup>50</sup>. No pasarán muchos meses antes de que Adolfo Paz aparezca propiamente en el Estado Mayor de las AUC.

<sup>49</sup> El Bloque Vencedores de Arauca aparece oficialmente como aliado del Bloque Central Bolívar en el libro *Escenarios para la paz* a partir de la construcción de regiones, de autoría del BCB, que apareció a principios de 2004. La revista BCB de julio del 2003 todavía no lo registraba.

<sup>50</sup> Estado Mayor Autodefensas Unidas de Colombia. *Montañas de Antioquia*, septiembre 29 de 2003. Un poco después, en el editorial de su publicación, también



Relatada de esta manera la historia, la recomposición de las AUC luce suficientemente significativa como para que algunas de las características que se les atribuían en el pasado pudieran aún mantenerse, y no hay duda de que la irrupción en la escena de Adolfo Paz y el Bloque Cacique Nutibara, un poco después, hace parte de esta transformación.

### El BCN y el usufructo de todas las guerras

Para comprender plenamente el significado de la definición de este bloque como una compleja estructura de redes, es necesario realizar varias precisiones. La primera, que una red existe si hay un objetivo común. En el caso específico del BCN, se trata de la extracción de rentas mediante medios criminales y el desarrollo de una estrategia de control social. En ésta se combinan los elementos estrictamente contrainsurgentes con un accionar que tiene como objetivo crear un monopolio cerrado de oportunidades en torno al manejo de la economía ilegal en la ciudad y la región.

En segundo lugar, a pesar de la existencia de este objetivo común y de la articulación de los diferentes nodos en torno a él, cada una de las estructuras que dan forma a la red tiene grados variables de autonomía o subordinación con respecto a la estructura global, y cada una de esas estructuras se inserta en la red desarrollando lógicas de acción más o menos propias y particulares. Las oficinas, las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial convergen a través de formas complejas de intermediación en el objetivo general del despliegue del proyecto de control social contrainsurgente en Medellín. Sin embargo, cada uno opera desde sus configuraciones, trayectorias y composiciones específicas. Todos ejercen control social y territorial, pero el nodo

firmado por Carlos Castaño, decía: “respaldamos y reconocemos el mando y el carácter de Autodefensa de nuestro amigo y compañero de causa comandante Adolfo Paz”, 8 de octubre del 2003.

paramilitar lo hace desde su lógica esencialmente contrainsurgente, las oficinas desde su lógica de control del mercado ilegal, las auto-defensas desde su lógica de control social y territorial, y las bandas desde su lógica de microempresarios de la criminalidad.

Por otra parte, toda red está compuesta por nodos con “funciones especializadas conectadas por vínculos de mando independientes entre sí pero subordinados a una cédula superior. De acuerdo a las necesidades de la red, los [nodos] independientes pueden actuar coordinadamente, pero siguen haciendo parte de una estructura fragmentada y difusa”<sup>51</sup>. En este sentido, el BCN, más que una estructura anárquica, es una organización reticular en la cual se aprecia un grado importante de jerarquización. Sin embargo, las jerarquías que allí se identifican son anchas y horizontales. Al hacer una lectura del BCN como red, se asume, entonces, que en su configuración aparecen nodos o estructuras jerárquicas densas (Adolfo Paz y algunos sectores de las oficinas y los paramilitares), y, también, nodos o estructuras jerárquicas livianas (las autodefensas barriales y las bandas).

Además, es necesario definir al BCN en la doble perspectiva de las relaciones entre los diferentes nodos de la red, y las relaciones de estos nodos con el entorno. En sentido estricto, las oficinas, las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial se relacionan entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios, y, a la vez, cada uno de estos intermediarios establece relaciones particulares y específicas con agentes específicos del entorno de la red. Llamar la atención sobre el papel de los intermediarios y sobre las variadas relaciones de los nodos con el entorno permite entender las conexiones y apoyos brindados —en diferentes momentos y territorios— por sectores de la policía, miembros del ejército colombiano, algunas comunidades y sectores de las elites políticas y sociales de la ciudad al proyecto paramilitar.

<sup>51</sup> Gustavo Duncan, *Del campo a la ciudad en Colombia: La infiltración urbana de los señores de la guerra*, Bogotá, Documento CEDE 2005-2, Bogotá, Universidad de los Andes, enero de 2005, p. 31.



Por último hay que considerar los fenómenos de flujo de combatientes entre los diversos actores del conflicto armado, facilitado por el proceso de aprendizaje recíproco descrito por Cubides y teorizado en los estudios sobre cultura y socialización políticas<sup>52</sup>, fenómeno generalizado, aunque los movimientos dominantes iban desde los actores primarios y nacionales del conflicto hacia las estructuras de las AUC. Ese "giro mercenario" en la guerra colombiana, como salida al escalamiento que demandaba más soldados, fue financiado por la enorme fuente de dinero que el narcotráfico ofreció a los grupos armados ilegales, en especial a las FARC y las AUC<sup>53</sup>.

En el trabajo titulado *Del campo a la ciudad en Colombia: La infiltración urbana de los señores de la guerra*, Gustavo Duncan plantea como hipótesis central que "la irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido por los jefes de las autodefensas desde el campo"<sup>54</sup>. Posiblemente, esta hipótesis se cumpla plenamente en pequeños municipios y en algunas ciudades intermedias estudiadas por el autor. Sin embargo, a la hora de analizar el caso del BCN es necesario invertir la hipótesis de Duncan y afirmar que la consolidación del proyecto paramilitar en Medellín, como una estrategia contrainsurgente y de control social que hoy alcanzaría a cubrir el 70% de los barrios de la ciudad<sup>55</sup>, sólo fue posible con el apoyo logístico, militar y financiero de las redes mafiosas. En este sentido, el BCN aparece como una red que, a la manera de una hidra,

<sup>52</sup> María Teresa Uribe de Hincapié, op. cit; Fernando Cubides, *Burocracias armadas*, op. cit.; Gabriel Almond y Bingham Powell (eds.), *Comparative politics today*, New York, Harper Collins, 1996.

<sup>53</sup> María Teresa Uribe de Hincapié, op. cit. Para el caso específico de los grupos paramilitares, Vilma Liliana Franco, "Mercenarismo corporativo y sociedad contrainsurgente", Estudios Políticos No. 21, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre de 2002. Para el caso de las FARC, Otty Patiño, "La generación X de las FARC", *El Tiempo*, 2003.

<sup>54</sup> Gustavo Duncan, op. cit.

<sup>55</sup> Elizabeth Yarce, "Medellín: 20 años de llanto en las calles. AUC controlan 70% de los barrios, dice informe de inteligencia", *El Colombiano*, 30 de abril de 2002.

aniquila, anuda o absorbe, a través de jerarquías anchas y horizontales, a los diferentes nodos esbozados en el apartado anterior.

Si nuestra hipótesis es válida, podemos afirmar que el BCN es una estructura reticular que articula actores tradicionales del conflicto armado como unidades guerrilleras rurales provenientes de los paramilitares y las guerrillas, actores primarios del conflicto armado (como bandas, combos y milicias) y núcleos refinados del crimen organizado (como las grandes bandas y oficinas). La inscripción estratégica y política de carácter contrainsurgente del BCN fue aportada por las AUC, mientras que la identidad estructural la aportó la mafia. No hay que olvidar que ya Negri y Hardt habían señalado perspicazmente como paradigmas de red a Al Qaeda y a los "carteles colombianos de la droga"<sup>56</sup>.

La descripción que hasta aquí hemos realizado se complementa, finalmente, con la afirmación de que el BCN tiene una presencia significativa en las comunidades como consecuencia del ejercicio de regulación que ejerce en cuatro tipos de actividades: a) las transacciones criminales a través de la eliminación de delincuentes, y la infiltración y control sobre formas delincuenciales organizadas como microempresas armadas<sup>57</sup>, b) la participación directa en actividades legales<sup>58</sup>, c) el acceso y control sobre instituciones y formas de participación comunitaria, y d) el despliegue de un claro ejercicio de intermediación entre las comunidades y la administración local.

Después de definir al BCN como una red, queda la pregunta acerca de cómo rutas tan diversas y nodos a los que se les atribuyen intereses diferentes, e incluso contradictorios, se articulan y logran desarrollar una actuación común. La respuesta más obvia a esta pregunta señala que estos nodos se fueron constituyendo a través de prácticas de aniquilamiento, subordinación, negociación y dominación, y a través de la puesta en marcha de intereses comunes articulados a partir de

<sup>56</sup> Michael Hardt y Antonio Negri, op. cit., p. 111.

<sup>57</sup> Gustavo Duncan, op. cit., pp. 32 y ss.

<sup>58</sup> *Ibid.*, pp. 36 y ss.





identidades ideológicas o a través de un simple ejercicio contractual. La respuesta menos obvia señala que esta convergencia estuvo determinada por el crecimiento de la economía ilegal, la debilidad del Estado, la presencia de intermediarios, el escalonamiento y el fracaso de la urbanización del conflicto, y la privatización y negociación permanente de los mercados de seguridad en la ciudad.

Hay tres asuntos centrales en esta segunda respuesta. El primero, es el reto que supuso para las AUC la intensificación del conflicto armado en la transición al siglo XXI (1999-2001), dada la dinámica que se presentó a raíz de la ofensiva militar de las FARC y la crisis del gobierno Samper, que tuvo un efecto significativo en las Fuerzas Militares. Según la declaración de un jefe disidente de las AUC, la intención de Carlos Castaño era “tomarnos el narcotráfico”<sup>59</sup>, presumiblemente con el fin de cubrir rápidamente la demanda de hombres, armas y dinero que el agravamiento de la guerra suponía.

En segundo lugar se encuentra el fracaso del Bloque Metro en su tarea estratégica de copar a Medellín y derrotar el proyecto guerrillero en proceso de instalación en la ciudad. De esta manera, la incorporación de las fuerzas urbanas comandadas por Adolfo Paz parecía deseable, dado que la hegemonía en la prestación ilegal de seguridad, surgida de una proyectada derrota de la guerrilla en Medellín, y el monopolio en la regulación de la economía ilegal eran propósitos complementarios. Así se facilitó, de hecho, el reencuentro de dos de los grandes actores armados de la región, a saber, las autodefensas y el aparato armado del narcotráfico (asumiendo que el Estado y las guerrillas son los restantes).

Finalmente las guerras que libraron los múltiples actores armados, las negociaciones adelantadas por el Estado para enfrentarlos y las acciones que dieron forma a las políticas de seguridad ciudadana en Medellín, en la década de 1990, propiciaron, agenciaron y justificaron el retiro paulatino, casual o intencional del Estado de la prestación

<sup>59</sup> “Un disidente paramilitar denuncia la expansión de los cultivos de coca”, *El Nuevo Herald*, Miami, 3 de julio 2003.

de la seguridad y la gestión del conflicto armado —ver anexo No. 1—. Este retiro del Estado dio forma a un modelo de negociación permanente del desorden, marcado por el papel preponderante de los intermediarios armados, y consolidó un formato de acción pública que permitió la igualación política de todos los actores armados generando una serie de trampas de equilibrio de alto nivel<sup>60</sup> que han permitido la inserción exitosa del paramilitarismo en la ciudad. La conclusión del secretario de gobierno de la administración Fajardo, y reconocido experto en la violencia de Medellín, es más radical: en esos años el Estado habría colapsado en la ciudad<sup>61</sup>.

### Bajo esta hipótesis, ¿cómo evaluar el proceso de desmovilización?

Si se asume que el BCN es una estructura reticular, entonces, ¿cómo debe evaluarse el proceso de su desmovilización? La respuesta a esta pregunta es mucho más compleja, pues son muchas las apreciaciones que se han realizado sobre la desmovilización de este bloque. Cuando se cumplía un año de ella, Alfredo Rangel, efectuando balances provisionales, anotó que el modelo Cacique Nutibara consiste en una desmovilización sin desmovilización; un desarme sin desarme y una reinserción sin reinserción, que busca tolerar veladamente el control de territorios por los paramilitares para impedir el retorno de la guerrilla<sup>62</sup>. Eduardo Pizarro, por su parte, concluía que en Medellín se produjo una “paramilitarización” de la ciudad y que la “desmovilización” del BCN fue, en realidad, una desmovilización ficticia, pues quienes aparecieron con uniformes y armas eran en realidad jóvenes

<sup>60</sup> Véase: Jon Elster, *El cambio tecnológico: Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 105.

<sup>61</sup> Alonso Salazar Jaramillo, Intervención en el lanzamiento del libro *Democracia y ciudadanías: Balance de derechos y libertades en Medellín*, de autoría de Luz Stella Álvarez y Jorge Bernal Medina, abril 2005.

<sup>62</sup> Alfredo Rangel, “Las negociaciones en Ralito. Dilemas Estratégicos”, *El Tiempo*, 8 de octubre 2004.



aliados en los barrios y no el grueso de la organización, ni sus cuadros de mando y dirección, que continuaron el proceso de dominio de la periferia de la ciudad. Pizarro señalaba que el control era más sutil: “no existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios [...] Hoy se respira un nuevo clima, pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma se hallan agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro”<sup>63</sup>.

De otro lado, y por la misma época, el jefe de la Misión Verificadora de la OEA para el proceso de desmovilización, Sergio Caramagna, dijo al diario *El Tiempo* que “presumían la existencia de una estructura paramilitar subyacente al BCN que aún no se había desmovilizado”<sup>64</sup>. El propio Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reconoció que en este proceso de desmovilización se mezclaron también integrantes de bandas que presuntamente no pertenecían al BCN<sup>65</sup>. En otro contexto, el secretario de gobierno de Medellín, Alonso Salazar, denunciaba la existencia de estructuras paramilitares en la ciudad, tales como los denominados Héroes de Granada, Frente José Luis Zuluaga y Autodefensas del Magdalena Medio<sup>66</sup>.

Cualquier observador más o menos serio del proceso debe reconocer que todos estos diagnósticos tienen la razón. Cada uno de ellos anota un aspecto real y problemático del proceso de desmovilización del BCN, y llama la atención sobre los riesgos reales que genera dicha

<sup>63</sup> Eduardo Pizarro Leongómez. “Una calma aparente. Paramilitarización urbana”. *El Tiempo*, Bogotá, 15 de agosto 2004.

<sup>64</sup> “OEA dice que verificación no es equivalente a peritaje: Se está violando el cese de hostilidades”. *El Tiempo*, 25 de septiembre 2004.

<sup>65</sup> Internacional Crisis Group, “Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿Una meta viable?”, Informe sobre América Latina, N° 8, 5 de agosto 2004, p. 13.

<sup>66</sup> “Mañana se cumple el primer año de la desmovilización del BCN de las AUC”, *El Tiempo*, Bogotá, 23 de noviembre 2004.

negociación. Sin embargo, estos diagnósticos deben acompañarse de una reflexión en la que se aborde la pregunta por el significado y las posibilidades reales que existen de desmovilizar a una red.

Si se asume que la verdadera naturaleza del BCN remite a la configuración de una red en la que convergen, de manera controlada y en permanente tensión, los nodos del narcotráfico, las autodefensas, el paramilitarismo y las bandas, y si se acepta que en la configuración de esta red aparecen nodos o estructuras jerárquicas densas y nodos o estructuras jerarquías livianas, entonces, es posible afirmar que la desmovilización del BCN es —y sólo podía ser— una desmovilización de algunos de estos nodos. Lo que se pretende afirmar es que el proceso adelantado hasta ahora nos muestra, fundamentalmente, la desmovilización y negociación con algunos nodos densos de la red.

De hecho, el proceso posterior de desmovilización del Bloque Héroes de Granada demostró que el BCN había terminado por ser un rótulo que describía sólo parte de la red que inicialmente nombraba. Efectivamente, después de la incorporación de Adolfo Paz a las AUC como inspector general, y de la derrota del Bloque Metro, la sigla BCN pasó a describir una estructura urbana destinada a abrir el largo camino de la desmovilización, mientras el nuevo Bloque Héroes de Granada cobijaba estructuras rurales del Nordeste y oriente antioqueños y de la región de Medellín, que por distintas razones tenían una temporalidad distinta.

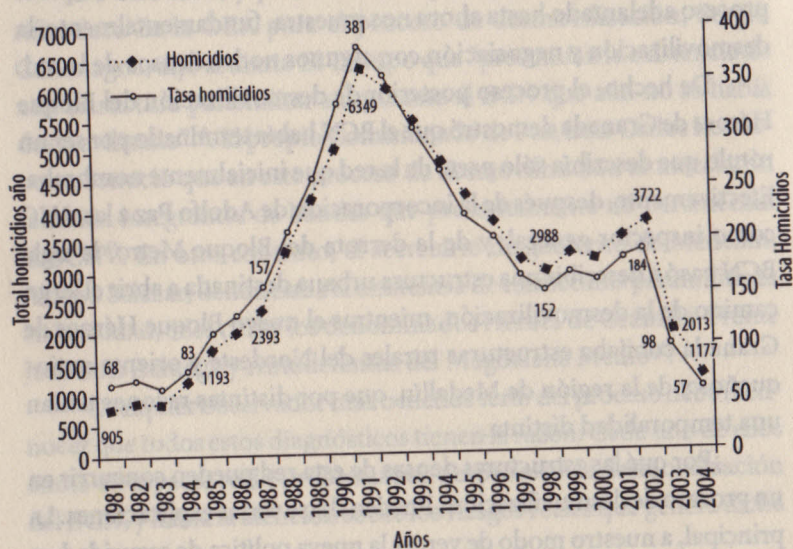
¿Por qué las estructuras densas de esta red pueden concurrir en un proceso de desmovilización? Pueden darse varias explicaciones. La principal, a nuestro modo de ver, es la nueva política de seguridad en la región de Medellín en cabeza del Estado. En este trabajo se ha argumentado que las políticas de seguridad y de pactos con las milicias y otros actores primarios del conflicto armado en Medellín configuraron una suerte de retiro del Estado, caracterizado por la admisión implícita de que su soberanía estaba en disputa. Las limitaciones estatales, en materia de seguridad, en Antioquia y la región, llegaron a su cenit en el 2002 y se expresaron en los acontecimientos de abril, cuando fue secuestrado el Gobernador de Antioquia en el occidente del depar-



tamento y abaleado el vehículo en el que se desplazaba el alcalde de Medellín en la Comuna 13. La decisión del gobierno nacional de poner en marcha las operaciones Orión (de recuperación de la Comuna 13) y Marcial (de ofensiva en el Oriente antioqueño) supuso, tal como lo muestra el cuadro 1, un quiebre en los indicadores de seguridad y el comienzo de la iniciativa estatal en la región<sup>67</sup>.

Cuadro 1

## Homicidios y tasa de homicidios en Medellín entre 1981 y 2004



<sup>67</sup> En septiembre de 2003, al año de estas operaciones, las estadísticas mostraban caídas del homicidio del 42% y del secuestro en un 40% para la región, y una reducción del 90% en el desplazamiento forzado. La disminución creciente de homicidios en la ciudad es una tendencia que viene desde 1991, año en que tuvo su registro histórico más alto. Esta tendencia sólo fue interrumpida durante el año 2002, lo que puede explicarse por los operativos y acciones de la Operación Orión en la Comuna 13 y sus consecuencias indirectas.

Otras dos posibles explicaciones son el proceso nacional de quiebra en la voluntad de combate de las AUC —expresado dramáticamente en la conducta de Carlos Castaño durante su último año de vida—, y el interés de los sectores armados del narcotráfico de legalizar sus fortunas y vidas, y asimilar el ejemplo de sus pares industriales y comercializadores de la cocaína que usufructuaron la derrota del Cartel de Medellín.

Si se acepta que cada una de las estructuras que dan forma a la red tiene grados variables de autonomía o subordinación con respecto a la estructura global, y se inserta en la red desarrollando lógicas de acción particulares, entonces, se tendrá que afirmar que el proceso de desmovilización siempre será parcial, pues existen claros límites en la posibilidad de desarticular cada uno de estos nodos. En este sentido, es necesario anotar que el proceso de negociación está inscrito —y probablemente siempre lo estará— en un contexto de permanente mimesis entre la legalidad y la ilegalidad.

Si se afirma que las oficinas, las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial se relacionan entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios, y que cada uno de éstos establece las relaciones específicas de los nodos con el entorno, habrá que abandonar toda pretensión inmediata de evaluar los verdaderos efectos de la desmovilización del BCN, en términos del pretendido ideal de desmontar el paramilitarismo en la ciudad. Por ahora, esta evaluación tendrá que hacerse en términos de la efectiva desarticulación y reinserción social de algunos componentes de esos nodos.

La existencia de una gran economía ilegal, de un mercado de seguridad con múltiples demandantes y oferentes armados y de una institucionalidad débil, que se estructura sobre la figura de los intermediarios legales y no legales, coloca las intenciones de desmontar el paramilitarismo en el terreno inmodesto de los ideales. Suponer que con las desmovilizaciones realizadas se puede desmontar el proyecto paramilitar equivale a decir que es posible recoger con los dedos la gota de mercurio que cae sobre el piso.



Quizás esta interpretación demande otra evaluación con respecto a este proceso, y otras estrategias para el posconflicto, distintas a las tradicionales, es decir, las usadas en las negociaciones nacionales y regionales efectuadas desde 1989. Las estrategias, según la síntesis que hace Manuel Castells, cubren tres procesos: “El primero es la desarticulación de la red. El segundo consiste en prevenir la reconfiguración de la red. Y el tercero es evitar la reproducción de la red”<sup>68</sup>.

El actual proceso de negociación y desmovilización cubriría totalmente el primer proceso, y como tal debería entenderse, pues ataca los nodos estratégicos, es decir, “aquellos en los que reside la capacidad de coordinación y toma de decisiones”<sup>69</sup>. En cualquier caso, la desarticulación de la red no supone que todas las estructuras armadas, especialmente las que son actores primarios del conflicto, se disuelvan, pues las nuevas limitaciones (prisión, desmovilización, judicialización) de los nodos hegemónicos modifican las condiciones de las relaciones internas. La variada procedencia de sus miembros y la alta presencia de mercenarios constituyen fenómenos nuevos en los procesos de paz y desmovilización en Colombia.

Los otros dos procesos son complejos, pero más accesibles de lo que serían sin el desmonte del aparato militar denso de la red. El segundo incluye una labor de alta inteligencia y policía, y contempla tareas de bloqueo financiero y económico, la ruptura de los mecanismos de control o contratación de actores primarios del conflicto o de la violencia social, y, seguramente, las tácticas operativas del tipo *swarming*<sup>70</sup>. El tercer proceso correspondería a lo que se denomina

<sup>68</sup> Manuel Castells, “La guerra red”, *El País*, Madrid, 18 de septiembre 2001.

<sup>69</sup> Ídem.

<sup>70</sup> En la definición de Castells: “basadas en el despliegue de pequeñas unidades de comando con alto poder de fuego, autonomía propia, coordinación electrónica entre las mismas y acceso constante a información por satélite y a apoyo aéreo instantáneo con armas de precisión”. Ídem. Ver: Eduardo Pizarro Leongómez, “Colombia: ¿Guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua?”, *Análisis político*, N° 46, Bogotá, Iepri, Universidad Nacional, mayo-agosto 2002, p. 178.

en la literatura “consolidación de la paz”, esto es, la institucionalización y afirmación del Estado, acompañada de la intervención cultural y social que pueda transformar el entorno que ha alimentado a estas redes criminales. Posiblemente, aquella imagen de la gota de mercurio en el piso que pretendemos atrapar con los dedos sea una buena metáfora para aludir al tipo de reto que supone la naturaleza descrita del paramilitarismo en la región de Medellín, si se continúa estudiando bajo cánones tradicionales.



## Anexo 1

## Las políticas públicas de seguridad en Medellín

## Apaciguamiento, histéresis y retiro del Estado

A comienzos de la década de los años noventas, cuando la ciudad de Medellín atravesaba por la que se ha denominado la crisis más grave de su historia, se formulan simultáneamente dos discursos en torno a los contenidos que debían asignarse a las políticas públicas de seguridad en la ciudad. El primero es el de la concertación, el pacto social y la convivencia, y, el segundo, el de la seguridad ciudadana. En términos de su origen y desarrollo, estos dos discursos se entrecruzan permanentemente; sin embargo, cada uno se inspira en diferentes circunstancias y está ligado a procesos nacionales que han tenido una importante incidencia en la ciudad de Medellín.

El discurso de la concertación y del pacto social se formula en el ambiente de optimismo de la Constitución de 1991, y en la euforia de la participación política que se desencadena con ella. De manera genérica, este discurso se trata de una opción política y gubernamental inspirada en el propósito de “pagar la deuda social” y de legitimar y acercar el Estado a la sociedad. Para el caso concreto de Medellín, la idea del pacto social se operacionalizó a través de la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, instancia de carácter nacional que tenía por objetivo:

“Formular las políticas generales y coordinar las acciones de las distintas agencias del Estado a través de la Dirección del Programa Presidencial, con el objeto de apoyar al gobierno y a la comunidad en la superación de la crisis por la que atraviesa; promover la búsqueda de soluciones a los agudos conflictos que afectan a las comunidades que la integran; identificar, promover, concertar y coordinar programas, proyectos y acciones de orden social que hagan posible una amplia participación comunitaria que convoque a todos los estamentos y

sectores de Medellín para la búsqueda de la reconstrucción social y la recuperación de una ética civilista y ciudadana”<sup>71</sup>.

Por su parte, el discurso de la seguridad ciudadana, que surge en el marco de la Estrategia Nacional contra la Violencia, tiene por objetivo “garantizar que el monopolio del uso de la fuerza esté en manos de las instituciones armadas estatales, según el mandato constitucional; recuperar la capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad y, finalmente, ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional”<sup>72</sup>. En Medellín, esta estrategia se desplegó con el diseño de planes de desarrollo en los cuales se planteaba de manera directa la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a “atacar” y “controlar” los problemas de la violencia y la criminalidad presentes en la ciudad.

En el marco de estos dos discursos, que constituyen el trasfondo para el diseño de las políticas públicas de seguridad en Medellín desde 1990, se han entrecruzado, complementado y superpuesto diseños políticos del nivel local con procesos y políticas nacionales determinantes en el desarrollo del conflicto armado en Medellín. En este sentido, cualquier intento de explicación de la paradójica relación existente entre el diseño de políticas públicas de convivencia y seguridad en Medellín y la irrupción, más o menos hegemónica, del Bloque Cacique Nutibara debe pasar por una mirada general de los planes de desarrollo y de dichas políticas implementados en la ciudad de Medellín en la década de los noventa.

La hipótesis que se desarrolla en este apartado es que el discurso y las acciones que dieron forma a las políticas de seguridad ciudadana en Medellín, en la década de los noventa, propiciaron, agenciaron y

<sup>71</sup> Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana. Municipio de Medellín, Corvide, PNUD. Programa integral de mejoramiento de barrios subnormales en Medellín (Primed): Estudios de factibilidad, Medellín, 1993, pp. 20-23.

<sup>72</sup> Presidencia de la República, *Promoción de la convivencia pacífica en Medellín y su área metropolitana*, 1991, p. 4.



justificaron el desplazamiento o retiro intencional y paulatino del Estado de la gestión del conflicto, produjeron un modelo de negociación permanente del desorden, marcado por el papel preponderante de los intermediarios armados, consolidaron un formato de acción pública que permitió la igualación política de todos los actores armados, y dieron origen a una serie de trampas de equilibrio de alto nivel<sup>73</sup> que permitieron la inserción exitosa del paramilitarismo en la ciudad.

### *Las políticas locales: Apaciguamiento y trampas de equilibrio*

Desde comienzos de la década de los noventa, el tema de la seguridad ciudadana aparece de manera recurrente en las discusiones sobre la ciudad y como un asunto de interés tanto para la sociedad como para las autoridades gubernamentales. La irrupción de esta temática y el punto de quiebre en relación con políticas públicas anteriores están ligados al proceso de concertación y pacto social que lideró la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana a comienzos de ese decenio. Con la participación de dicho ente se realizaron varios seminarios en los que se abordaron los temas de la seguridad ciudadana, la policía, el problema de la violencia y la criminalidad, y la necesidad de buscar mecanismos de concertación social.

En el marco de estos seminarios se presenta un notable cambio de rumbo en las políticas gubernamentales referentes a la problemática de la violencia y de la inseguridad en la ciudad. Específicamente, estos cambios se refieren al diseño de un conjunto de políticas que tienen como punto de partida el reconocimiento de la imposibilidad de que la administración siga evadiendo sus responsabilidades en la solución del problema de violencia de la ciudad. Hasta principios de la década del noventa, existía una percepción de la administración local según la cual la violencia no había surgido en Medellín, ni era exclusiva de la ciudad, ni estaba en manos del gobierno local resol-

<sup>73</sup> Véase: Jon Elster, *El cambio tecnológico: Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 105.

verla. Las razones que se argumentaban al respecto eran de diversa índole: a) que las autoridades no se consideraban responsables de la generación y del incremento de los sucesos de violencia; b) que los factores desencadenantes de la violencia eran externos a la ciudad y no estaban relacionados con la acción del gobierno municipal —entre ellos, la política de guerra contra el narcotráfico y las acciones contra la guerrilla —; c) que la acción de la administración municipal estaba limitada por una legislación que, en materia de orden público y seguridad, privilegiaba a las autoridades nacionales (artículo 315, numeral 2 de la Constitución)<sup>74</sup>.

La transformación en la actitud de los gobiernos locales en materia de seguridad tenía un segundo sentido, que consistía en aceptar que el tratamiento represivo que había predominado hasta ese momento para enfrentar problemas como el del narcoterrorismo y el sicariato era equivocado. Aunque no se indicó explícitamente en ningún lugar, se sugirió, en discusiones del Concejo Municipal, en la prensa escrita y en algunos círculos académicos, que los cuerpos de seguridad desarrollaban acciones encubiertas movidas por el ánimo de la retaliación y que no solamente eran ineficaces sino que también aislaban mucho más al Estado y a sus autoridades de la sociedad. Para corregir estas dos situaciones, las autoridades locales consideraron la necesidad de diseñar y aplicar una política de seguridad ciudadana para la ciudad.

Una mirada general de los planes de desarrollo, en lo referido a la seguridad ciudadana y la convivencia, implementados en la ciudad de Medellín en la década de los noventa, permite identificar variaciones en las percepciones que las administraciones de la ciudad han tenido del tema, así como en las prioridades en materia de gestión pública. Una de esas variaciones tiene que ver con la identificación de los que se consideran problemas de la ciudad; otra, con los interlocutores de la comunidad y con el papel que deben realizar para abordar estas

<sup>74</sup> Véase: William Fredy Pérez Toro y Juan Carlos Vélez Rendón, "Seguridad ciudadana y homicidio en Medellín", *Estudios Políticos* No. 11, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre de 1997.



problemáticas; finalmente, las acciones que se concibieron para resolver institucionalmente tales inconvenientes. Sin embargo, y más allá de estas variaciones, puede afirmarse que coincidían en dos aspectos básicos. En primer lugar, se asignaba un papel central a la sociedad civil en el tema de la seguridad y se privilegiaba las formas de autogestión del conflicto en las cuales se daba un lugar protagónico a las negociaciones con las numerosas organizaciones armadas que tenían, por un lado, una alta capacidad de chantaje y disrupción del orden y, por el otro, una posibilidad de ofrecer servicios y funciones de seguridad y justicia, es decir, de producir control. En segundo lugar, todas ellas se plantean como un nuevo punto de partida y como un punto de ruptura con la política anterior. La consecuencia lógica es que, en términos globales, la década del noventa estuviera marcada por la ausencia de una política de seguridad coherente y a largo plazo, que trascendiera los afanes trazados por los indicadores de la criminalidad y las permanentes negociaciones del desorden con los actores armados presentes en la ciudad.

Las dos primeras administraciones populares de la ciudad tenían un discurso referente a la seguridad ciudadana y una percepción vaga de la dimensión que habían alcanzado la violencia y los homicidios para finales del decenio de 1980 —entre cuatrocientos y quinientos homicidios por mes, según datos oficiales—<sup>75</sup>. Para la administración de Juan Gómez Martínez (1988-1990,) la ciudad estaba atravesando una crisis que estaba determinada, básicamente, por el fenómeno negativo del narcotráfico. Las prioridades para esta administración eran, en consecuencia, recuperar la imagen de la ciudad y contrarrestar la información que ofrecían los medios de comunicación sobre la narcotización de la capital antioqueña. En términos concretos, en el programa de gobierno se propuso una mayor acción en temas como el de “la seguridad” y el “orden público”, el auxilio a la rama jurisdiccional en investigaciones de contravenciones, delitos y diligenciamiento de comisiones, la recu-

<sup>75</sup> Alcaldía de Medellín, Hecho ya realidad: Juan Gómez Martínez. *Balace de una administración actuante*, Medellín, Imprenta Municipal, 1990, pp. 38-39.

peración del espacio público, el control de brotes de indisciplina social y el control de establecimientos abiertos al público.

Para el logro de algunos de estos objetivos, la administración municipal buscaba fortalecer su relación con la sociedad, a partir de “un nuevo concepto de participación”, con el cual se pretendía vincular a las juntas de acción comunal de la ciudad en actividades tendientes a la conciliación y resolución de problemas civiles y penales, a la realización de obras de infraestructura, y de desarrollo y promoción comunitaria. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo campañas educativas, como “el mes del comportamiento ciudadano”. El objetivo central de esta campaña era “fomentar en forma masiva los valores ciudadanos, para darle a Medellín un ambiente más cálido, tanto en sus gentes como en su presentación”, y apoyar “los programas que inculcan los valores y promueven las estrategias de beneficio común”<sup>76</sup>.

La administración del alcalde Omar Flórez Vélez (1990-1992), por su parte, diseñó un Programa de Civilidad “como propuesta para la solución de conflictos”. Partiendo de la idea de que “el problema de Medellín es fundamentalmente cultural”, la tarea que se impuso esa alcaldía era “la superación de ese producto irracional de múltiples causas que es la violencia”, oponiéndole a ese “modelo contracultural basado en la violencia y la muerte una cultura sustentada en la convivencia pacífica, una cultura de la paz”. Para el logro de tal objetivo, se proponía, en conjunto con un Plan de Acción Social:

“la consolidación del Estado de derecho, el establecimiento de relaciones de convivencia y tolerancia, el respeto por los derechos humanos, la solución pacífica y concertada de los conflictos, la construcción de una ética profesional para los organismos de seguridad, la supresión de la dicotomía Estado-sociedad, la generación de empleo y el impulso al desarrollo con justicia social”<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> *Ibíd.*, p. 89.

<sup>77</sup> Omar Flórez Vélez, “Propuesta para la convivencia ciudadana en Medellín”, en: *Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana*, Medellín: Alternativas de Futuro, Medellín, 1992, pp. 21-24.



A fin de “borrar” la brecha que separaba la sociedad del Estado, se buscaba fortalecer las formas de participación comunitaria, las organizaciones no gubernamentales, las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales<sup>78</sup>.

Acorde con el ambiente participativo propiciado con la expedición de la Constitución de 1991, y acogiendo los planteamientos generales enunciados por la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, estas dos administraciones impulsaron dos ideas que tendrían mucho peso en las dinámicas de conflicto en la ciudad. La primera se refiere a la búsqueda de la solución pacífica y concertada de los conflictos; y, la segunda, al impulso a la participación comunitaria como principio básico de la agenda de gobierno. Estas dos ideas, que en principio no tienen ningún tipo de connotación negativa, se vuelven problemáticas cuando se ponen a operar en contextos en los cuales están presentes múltiples actores armados, y, fundamentalmente, cuando se desplazan desde el campo de la convivencia y la cultura ciudadana hacia el campo de la seguridad.

Durante la administración de Luis Alfredo Ramos (1992-1994), se presenta un nuevo cambio en materia de seguridad ciudadana. En esta administración se concibe, dentro del Plan General de Desarrollo para Medellín<sup>79</sup>, un Plan Estratégico de Seguridad que, más allá de la enunciación de una problemática, trataba de constituirse en “guía” o “norte” de la acción oficial. Los objetivos generales del plan hacen énfasis en la identidad de valores, en la promoción de un ciudadano responsable para generar “una cultura del reconocimiento” individual y colectivo, y en el apoyo a la sociedad organizada y la concepción de una comunidad protagonista de su historia. Así, proponía el plan de desarrollo se propone la participación comunitaria como un “mecanismo de materialización de la democracia moderna, en la cual la comunidad organizada construye y crea su propia cultura”<sup>80</sup>.

<sup>78</sup> *Ibíd.*, p. 24

<sup>79</sup> Municipio de Medellín, Plan General de Desarrollo para Medellín: Parte estratégica, Noviembre 1992. p. 7.

<sup>80</sup> *Ibíd.*, p. 9.

Esto, naturalmente, se expresa en asuntos como el de la seguridad ciudadana, en la que se concibe a la comunidad como gestora de su propia seguridad. Específicamente, en los objetivos del plan se lee que la política de seguridad ciudadana debía: “propiciar entre la comunidad la conciencia de que a ella le corresponde en primera instancia la salvaguarda de las condiciones básicas de seguridad en su entorno, dentro de una cultura de conocimiento y respeto de los derechos y deberes cívicos”. El Estado, a través de los organismos de seguridad y de los inspectores de policía, asume un papel complementario: por un lado, “controlar [...] las situaciones que excedan la capacidad de control de seguridad por parte de la comunidad”, y, por el otro, “propiciar la actuación efectiva y oportuna de los inspectores municipales de policía para que actúen como líderes comunitarios en la conservación del orden público, de la seguridad y de la protección ciudadana en sus respectivas jurisdicciones”<sup>81</sup>.

De otro lado, esta administración creó la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, que tenía entre sus funciones el apoyo a los diálogos, negociación y reinserción que el gobierno central adelantaba con las Milicias del Pueblo y para el Pueblo, con las Milicias Independientes del Valle del Aburrá, con las Milicias Metropolitanas y con las Milicias del Valle de Aburrá de Moravia y El Bosque, así como el desarrollo del pacto de convivencia en el barrio Trinidad. Con la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia, y con el proceso de reinserción de algunas milicias de la ciudad, la administración municipal empieza a reconocer entre sus interlocutores a grupos armados, y para desactivarlos diseña formas de negociación política con las cuales intenta resolver problemas de violencia y de criminalidad en

<sup>81</sup> El involucramiento de la comunidad en el asunto de la seguridad es reiterado en el planteamiento de otra estrategia, según la cual “el municipio de Medellín orientará, coordinará y dirigirá las acciones necesarias para lograr que las comunidades se vinculen de manera real en los procesos de información, decisión, gestión y vigilancia contemplados en la Constitución y para garantizar la participación de la comunidad en la identificación y solución de los diferentes problemas que caracterizan su entorno.” *Ibíd.*, p. 25.



general. El estímulo a la sociedad para que asuma protagonismo en materia del logro de su seguridad y el intento por desactivar un factor de violencia y de criminalidad, como el de las milicias y las bandas, refuerzan la ambigüedad y la contradicción subyacente en una política de seguridad ciudadana que tiene como eje de su gestión la búsqueda del orden en la ciudad, a partir de una forma de privatización de la gestión de la seguridad y de una instrumentalización de pactos con grupos armados para el logro de la gobernabilidad.

La administración de Sergio Naranjo (1995-1997), que coincide con un momento de “recuperación” y “cambio de la imagen” de la ciudad, concibe un plan de seguridad que se puede rastrear, con sus novedades, ambivalencias y pragmatismo, en el programa de gobierno, en el discurso de posesión y en el plan de desarrollo. El propósito enunciado inicialmente por Sergio Naranjo es el de desarrollar un “pacto colectivo que está por encima de los partidos políticos, que va más allá de los intereses sectoriales y que identifica responsabilidades y compromisos entre todos los participantes en el corto, mediano y largo plazo”<sup>82</sup>. Las prioridades básicas, contempladas en el Plan de Gobierno<sup>83</sup>, son la seguridad, el empleo y la inversión social, especialmente en educación. En relación con la seguridad, en el Plan de Desarrollo de Medellín: 1995-1997, se realiza un diagnóstico en el que se identifican factores que inciden en la criminalidad e inseguridad “excepcionalmente altas” de Medellín. Entre esos factores se destacan el bajo nivel de calidad de vida, la crisis de legitimidad del Estado y de los partidos políticos, la pérdida de identidad colectiva, la impunidad, la corrupción administrativa y la presencia de movimientos populares armados<sup>84</sup>. No obstante el reconocimiento de estos elementos, se asume que la inseguridad se deriva de la acción delincuencia de grupos organizados, de las

<sup>82</sup> Sergio Naranjo Pérez, “Medellín: Una ciudad para la modernidad”. Palabras en el acto de posesión, enero 1995, p. 7.

<sup>83</sup> Sergio Naranjo Pérez, “Síntesis programa de gobierno: 1995-1997”, agosto 1994

<sup>84</sup> Alcaldía de Medellín, *Plan de Desarrollo de Medellín: 1995-1997* (Versión aprobada por el honorable Concejo Municipal), op. cit.

milicias y la guerrilla, de la actitud violenta y agresiva de la población y de los accidentes de tránsito. En consecuencia, se busca la reducción de la tasa de criminalidad y la represión del delito en el corto plazo, y la prevención en el mediano y en el largo plazo.

Entre los propósitos y los instrumentos diseñados para enfrentar estos fenómenos, la administración local menciona el interés por la búsqueda de consensos, y los diálogos y “acuerdos de paz” con grupos armados, algunos de los cuales avanzan en la experiencia de la reinserción. Así, destaca que la administración municipal, por medio de la Asesoría de Paz y Convivencia, establece estrategias de consenso, participación y tolerancia, de las que participa un sector importante de las milicias populares. A la Asesoría de Paz y Convivencia, concretamente, la considera un instrumento básico para la convivencia, en la medida en que ha aportado a la “solución pacífica de conflictos”, ha facilitado acuerdos con distintos grupos armados y ha facilitado la búsqueda de acuerdos.

Otro aspecto relevante en esta administración es que mantiene la propuesta de promover una participación directa de la comunidad en el logro de la seguridad ciudadana, que se concreta en el eslogan “la seguridad es asunto de todos”. Persisten, entonces, la ambigüedad y la ambivalencia anunciadas atrás, pero se deja cada vez más claro que en las políticas de seguridad ciudadana hay una acción intencional dirigida al logro de la gobernabilidad y el orden en la ciudad. De hecho, los procesos de reinserción en marcha, a partir de la experiencia de Coosercom<sup>85</sup>, y el inicio de nuevos diálogos con grupos armados para lograr pactos de no agresión<sup>86</sup>, expresan la necesidad de buscar instrumentos eficaces para la disminución de índices de violencia y de

<sup>85</sup> Cooperativa de Vigilancia que se conforma como resultado de la firma, el 26 de mayo de 1994, del Acuerdo Político para la Convivencia Ciudadana, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Milicias Independientes del Valle del Aburrá, las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias Metropolitanas de Medellín.

<sup>86</sup> En Medellín se llegó a establecer alrededor de 57 pactos de no agresión. Estos procesos de mediación comprometían a cerca de 160 grupos armados presentes en 86 sectores de la ciudad.



criminalidad, dos variables usadas para medir el éxito de la política de seguridad ciudadana en su tarea de obtener la paz para la ciudad.

La administración de Juan Gómez Martínez (1997-2000) formula un Plan de Desarrollo que tiene como referente general el proyecto de globalización para la ciudad y un nuevo modelo de Estado promotor, “abierto a la cooperación público-privada y comunitaria”, con una mayor racionalidad en la función pública, de tal modo que “no renuncia a la coordinación y regulación pero faculta a la sociedad civil en la provisión de aquellas actividades y servicios en los cuales el gobierno local no es competitivo”<sup>87</sup>. Lo anterior se sintetiza en el propósito de hacer de Medellín “un centro internacional de la convivencia” y “la mejor esquina de América”. Para este propósito, como para los demás de esta administración, se advierte la necesidad de buscar la concertación, cooperación y consenso con la comunidad y con el sector privado, y de hacer uso de la racionalidad como un instrumento básico para el logro de los objetivos.

En relación con la ciudadanía y la convivencia, a partir de un diagnóstico “negativo” de lo que ha sido la participación de la sociedad civil en esta materia, se plantean unos principios básicos referidos a la tolerancia, el pluralismo y la civilidad. Igualmente, en el componente estratégico referido a la seguridad, paz y convivencia, se identifica la existencia de un grupo poblacional marginado, relacionado directamente con “los fenómenos de inseguridad y conflicto en Medellín”. Este grupo está conformado por aquellos “en condiciones de baja calidad de vida, relacionada con una inequitativa distribución del ingreso y unos altos índices de desempleo”, a los que se suma una población desplazada por el conflicto armado<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana, Plan de Desarrollo de Medellín: 1998-2000. (Versión preliminar). *Por una ciudad más humana*, Medellín, Viva la Ciudadanía, PAN, IPC, ENS, Corporación Región, Fundación Social, 1998, p. 21, pp. 7-8.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 43.

Los programas en el área de seguridad, paz y convivencia se sintetizan en los siguientes aspectos: a) apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana; b) observatorio de la violencia para diseñar un sistema de investigación, información, procesamiento y análisis de datos; c) mejoramiento de la justicia y acercamiento a la comunidad de las instituciones del gobierno encargadas de la paz y la convivencia ciudadanas; d) desarrollo de trabajo con niños y jóvenes orientado a buscar “la detección precoz de niños agresivos y la utilización de pautas para su crianza y educación”; e) creación de una red de instituciones para apoyar la convivencia ciudadana en los jóvenes; f) concepción de los medios de comunicación social como promotores de la convivencia ciudadana; g) apoyo institucional para la modernización de la administración y la gestión de la estructura y organización municipal en aras de institucionalizar programas efectivos de paz y convivencia y poner en marcha mecanismos de coordinación interinstitucional y con los diferentes sectores; y h) participación activa de la sociedad civil en la identificación, seguimiento y evaluación de los proyectos<sup>89</sup>.

En uno de sus puntos fundamentales, la seguridad ciudadana se sigue inscribiendo en el marco de una política de control de la criminalidad que tiene como eje fundamental la negociación con los actores armados. La intervención de esta administración como mediadora en numerosos pactos de no agresión revela la continuidad de una política que, en materia de disminución de índices de criminalidad, arrojó resultados positivos para la coyuntura. Sin embargo, a partir de esta alcaldía, los pactos entre bandas forman parte del contexto de la intermediación y control del paramilitarismo.

### *Negociación del desorden, intermediarios armados y trampas de equilibrio*

Aunque las administraciones locales suelen usar instrumentalmente los datos estadísticos sobre criminalidad y violencia para hacer

<sup>89</sup> *Ibid.*, p. 45 y 46.



los balances de gestión de la política de seguridad ciudadana, y de la acción en materia de paz y convivencia, pocas veces se advierte cómo se concretan tales políticas y qué resultados arrojan. En este apartado interesa detenerse, específicamente, en el desplazamiento o retiro intencional, parcial y estratégico del Estado del asunto de la seguridad, y en el consecuente protagonismo de la comunidad en este campo. Esto con el fin de señalar que las políticas públicas de seguridad en Medellín, a lo largo de la década de los noventa, crearon un entorno en el que se privilegió la autogestión del conflicto, lo que benefició a las numerosas organizaciones armadas dispuestas a ofrecer servicios y funciones de seguridad y justicia en las comunidades.

El balance global que se puede realizar sobre los programas de seguridad ciudadana en Medellín señala que ellos siempre formaron parte de una política general de control a la criminalidad, desplegada en una ciudad que se encontraba librando una o múltiples guerras. Así, esta política criminal y los diversos procesos de negociación que ella generó fueron un “instrumento ideal para la restauración de un orden puesto en entredicho por actores contraestatales y paraestatales, y por numerosos grupos armados”<sup>90</sup>, a través del uso de la violencia. Esta relación existente entre la guerra y los programas de seguridad ciudadana articuló una lógica de acción orientada a la confrontación abierta y permanente, con otra de transacción y negociación que delataba la existencia de formas inéditas y precarias de diplomacia armada.

De acuerdo con la hipótesis que aquí se sostiene, los diferentes gobiernos locales, en su intento por enfrentar las múltiples crisis de violencia experimentadas por la ciudad, adoptaron un papel de mediadores que reportaba beneficios puntuales en términos de reducción de la criminalidad y ejercicio de control social, pero, al mismo tiempo, develaba la frágil condición de poder político a nivel local y redimensionaba el poder de sus interlocutores armados reco-

<sup>90</sup> Juan Carlos Vélez Rendón, “Conflicto y guerra: La lucha por el orden en Medellín”, Estudios Políticos No. 18, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio de 2001, p. 81.

nociéndolos como actores políticos o tratándolos como enemigos<sup>91</sup>. Una mirada retrospectiva a los diferentes programas de seguridad ciudadana adelantados en Medellín muestra que la promoción de procesos de mediación y la firma de pactos, con y entre grupos armados, “fueron instrumentalizados por cada uno de los diversos sectores involucrados directa o indirectamente en ellos (gobierno local, actores del conflicto armado y los mismos combos, bandas y milicias) para lograr propósitos concretos, diferenciados y, en ocasiones, complementarios o contradictorios entre sí”<sup>92</sup>.

El contexto socio-político en el que se realizaron los diferentes pactos de no agresión y las negociaciones con grupos milicianos se puede definir como un sistema abierto de oportunidades<sup>93</sup>, es decir, como un entorno “en el cual el Estado no ha logrado monopolizar el uso de la fuerza y se mantiene, aún con esas estrategias pactuales, como un competidor más entre otros que le disputan con éxito su monopolio básico: el de la fuerza”. Esta condición, en el mediano plazo, le hizo perder su lugar estratégico a nivel micro, en relación con la preservación del monopolio de la ley y el monopolio financiero. A partir del desarrollo de lógicas de confrontación y lógicas de negociación, los combos, las bandas y las milicias lograron constituir “órdenes volátiles y transitorios en determinados territorios de la ciudad, donde son aplicadas y aceptadas legalidades diferentes de la estatal, donde existe una oferta de seguridad y justicia inmediata sustentada en el uso y concentración creciente del recurso a la fuerza”<sup>94</sup>, y donde se ejerce un control directo

<sup>91</sup> Ibid., p. 73.

<sup>92</sup> Ibidem.

<sup>93</sup> Aludiendo a este fenómeno, Francisco Gutiérrez habla de una sociedad turbulenta, es decir, “una que siendo sociedad civil en sentido clásico, no está (o lo está muy poco) estratégicamente restringida”. Véase: Francisco Gutiérrez Sanín. “Gestión del conflicto en entornos turbulentos”. En: Jaime Giraldo Ángel, et al, *Conflicto y contexto: Resolución alternativa de conflictos y contexto social*, Bogotá, Tercer Mundo, Instituto Ser de Investigaciones, Colciencias, 1997, p. 91.

<sup>94</sup> Véase: Juan Carlos Vélez Rendón, op. cit., p. 71.



sobre manifestaciones concretas de criminalidad desarrolladas por sus integrantes, o por los de grupos menos fortalecidos militarmente.

En esta situación se aprecia el rasgo básico de un Estado que apeló a intermediarios con el fin de llevar a cabo transacciones e intercambios transitorios, inestables y volátiles, para negociar el desorden; es decir, un Estado que “ante la dificultad real por imponer, hace reconocer y acatar el orden republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos precarios, termina por negociar el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regularidades más o menos explícitas, que sólo existen como tales en esa zona difusa, semipública —semiprivada— donde los órdenes político institucionales y los ordenes societales se entrecruzan”<sup>95</sup>. En el contexto de una sociedad turbulenta que construye ideas de orden a través de esta negociación permanente del desorden, las políticas de seguridad ciudadana sustentadas en los pactos y en la negociación con grupos armados de diversa índole quedan reducidas a: “a) una salida gubernamental que reporta beneficios coyunturales en términos de la disminución de los índices de criminalidad de la ciudad; b) una opción de los combos, bandas o milicias para fortalecerse financieramente y militarmente así como para mantener controles microlocales; c) o en un recurso institucional más de paramilitares y guerrillas para avanzar en la guerra”<sup>96</sup>.

Bajo el lema de la “seguridad es un asunto de todos”, las instancias gubernamentales le atribuyeron a la comunidad una responsabilidad directa en la solución de problemas de inseguridad, dejando al Estado las situaciones que excedían la capacidad de control por parte de la comunidad. Desde que se comenzó a promover tal eslogan, toma auge entre sectores gubernamentales y sociales la idea de involucrar a personas civiles en diferentes tareas correspondientes a labores de policía. Entre muchas otras medidas tomadas a lo largo de la década, orientadas hacia este propósito, es importante señalar,

<sup>95</sup> María Teresa Uribe de Hincapié, “La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades”, en Jaime Giraldo Ángel et al., op. cit., p. 171.

<sup>96</sup> Juan Carlos Vélez Rendón, op. cit., p. 72.

además de los pactos de no agresión y la negociación con milicias, la expedición de los manuales de seguridad ciudadana<sup>97</sup>, el impulso a los Frentes de Seguridad<sup>98</sup>, la creación de la figura de la policía civil en el área de voluntarios, la promoción de las escuelas de seguridad<sup>99</sup> y la creación de las Convivir.

En un ambiente marcado por repetidos aprendizajes de negociación, por el retiro parcial del Estado y por la descentralización y privatización de las tareas de seguridad, tomaron forma y se desplegaron políticas públicas de seguridad ciudadana que convirtieron:

“Al mediador y [al] ‘detentador de las reglas’ [en] un actor más. A medida que todo se va volviendo factible, el cambio mismo de las reglas de juego (por ejemplo de los costos o beneficios asociados a una decisión) es una posibilidad abierta en todos y cada uno de los pasos de un conflicto. El mismo hecho de no cambiar las reglas se convierte en una acción estratégica. Todo ello altera el estatus del mediador y ‘cubre con una neblina’ de sospecha su comportamiento. El mediador pasa del regulador exógeno e imparcial del modelo hobbesiano a ser otro adversario. En contextos sociales convencionales, la imagen del mediador imparcial es una ficción funcional. A medida que aumenta la turbulencia, va desapareciendo del paisaje

<sup>97</sup> Que presenta recomendaciones sobre la manera como cada persona debe comportarse en las calles, en el barrio, en la oficina, en su domicilio, en el vehículo, en las aglomeraciones y con el servicio doméstico. Alcaldía de Medellín, *Manual de seguridad ciudadana*, Medellín, 1992.

<sup>98</sup> Los frentes de seguridad son concebidos como organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional, que buscan crear cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la convivencia pacífica mediante la vinculación de los vecinos por cuadradas para contrarrestar la inseguridad. Para octubre del año 2000 había, en el Valle de Aburrá, 226 barrios en los que se crearon 463 frentes de seguridad.

<sup>99</sup> Amparadas en el decreto 012 del 9 de julio de 1996, en Medellín se crean 24 de estas escuelas. Su función es brindar “al ciudadano la oportunidad de aprender estrategias básicas para contrarrestar la inseguridad”. Véase: “La ciudadanía se arma de inteligencia”, *El Colombiano*, 18 de agosto 2000.



social y cognitivo; lo reemplaza el tertium gaudens de Simmel, un tercero interesado que actúa como un jugador más”<sup>100</sup>.

La consecuencia no deseada de esta progresiva conversión del Estado en un jugador más fue la consolidación de un conjunto de intermediarios armados que, al poseer una alta capacidad de control social en espacios territoriales claramente delimitados, encontraron un escenario institucional propicio para desarrollar aprendizajes permanentes de negociación del desorden. Parafraseando a Juan Carlos Vélez, se puede afirmar, entonces, que este retiro parcial del gobierno local le permitió a los actores del conflicto armado colombiano (paramilitares y guerrillas) fortalecerse militarmente en muchos barrios de la ciudad, ocupar un destacado lugar en la oferta de seguridad y aprovechar los medios políticos, institucionales y económicos a su alcance para el logro de cierta forma de institucionalización. A través de la definición de intermediarios, la gestión de proyectos sociales, el ordenamiento del espacio público y la promoción u obstaculización de liderazgos, estos actores lograron construir proyectos de control social con territorialidades más o menos precisas.

El proceso de negociación con grupos milicianos y el desarrollo de la política de los pactos de no agresión con las bandas constituyen el ejemplo central de ese conjunto de políticas públicas de seguridad fundamentadas en la negociación del desorden y el control de la criminalidad. La neutralización de grupos armados por medio de la negociación política o la realización de pactos llevó consigo el logro de la seguridad ciudadana en el sentido del control de los delincuentes y del delito, pero, al mismo tiempo, condujo a la administración local a trampas de equilibrio y resultados inconvenientes que, en últimas, fueron un recurso institucional de las guerrillas y de los paramilitares para desplegar su proyecto en la ciudad.

<sup>100</sup> Francisco Gutiérrez Sanín, op. cit., p. 93.

## Bibliografía

- Almond, Gabriel y Powell, Bingham (eds.), 1996, *Comparative Politics Today*, New York, Harper Collins.
- Arquilla, John y Ronfeldt, David (editores), 2001, *Networks and Netwars: The Future of Terror. Crime, and Militancy*, Santa Mónica, Rand Corporation.
- Castells, Manuel, “La guerra red”. *El País*, Madrid, 18 de septiembre 2001.
- Conferencia Episcopal de Colombia, 2001, *Desplazamiento forzado en Antioquia: 1985-1998*, Bogotá, Kimpres.
- Cubides, Fernando, 2005, *Burocracias armadas*, Bogotá, Norma.
- , “Santa Fe de Ralito: Avatares e incongruencias de un conato de negociación”. *Análisis Político*, No. 53, Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional, enero-marzo 2005.
- Duncan, Gustavo, 2005, “Del campo a la ciudad en Colombia: La infiltración urbana de los señores de la guerra”, Bogotá, Documento CEDE 2005-2, Bogotá, Universidad de los Andes, enero 2005.
- Elster, Jon, 1992, *El cambio tecnológico: Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Barcelona, Gedisa.
- Franco, Vilma Lilibiana, “Mercenarismo corporativo y sociedad contrainsurgente”. *Estudios Políticos* No. 21, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre 2002, Medellín.
- Garzón, Juan Carlos, 2005, “La complejidad paramilitar: Una aproximación estratégica”, en: Alfredo Rangel (Editor), *El poder paramilitar*, Bogotá, Planeta, Fundación Seguridad y Democracia.
- Granda Marín, Alberto y Ramírez, Iván Darío, 20 de marzo de 2001, *Contexto general de la violencia en Medellín*, Medellín, UPB.
- Francisco Gutiérrez Sanín, 1997, “Gestión del conflicto en entornos turbulentos”, en: Jaime Giraldo Ángel. et al, *Conflicto y contexto: Resolución alternativa de conflictos y contexto social*, Bogotá, Tercer Mundo, Instituto Ser de Investigaciones, Colciencias.
- Hardt, Michael y Negri, Antonio, 2004, *Multitud: Guerra y democracia en la era del Imperio*, Barcelona, Debate.
- Internacional Crisis Group, “Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿Una meta viable?” *Informe sobre América Latina*, N° 8, 5 de agosto 2004.
- Jaramillo, Ana María, 1994, *Milicias Populares en Medellín: Entre la guerra y la paz*, Medellín, Corporación Región.



- \_\_\_\_\_. "Milicias populares en Medellín: Entre lo privado y lo público", Revista Foro, Bogotá, noviembre 1993.
- Jaramillo Martínez, Julio y Bedoya Marín, Diego Alejandro, 1990, "Ensayo interdisciplinario sobre el sicariato", en: *Violencia juvenil: Diagnóstico y alternativas. Memorias del seminario sobre la Comuna Nororiental de Medellín*, Medellín, Corporación Región.
- Jiménez Gómez, Carlos, 1986, *Una procuraduría de opinión*. Bogotá, Procuraduría General de la Nación.
- Medina Gallego, Carlos, 1990, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*. Bogotá, Documentos periodísticos.
- Pécaut, Daniel, 2003, *Midiendo fuerzas: Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá, Planeta.
- Pizarro Leongómez, Eduardo, 2004, *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá, Norma.
- \_\_\_\_\_, "Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua?". *Análisis Político*, N° 46, Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional, mayo-agosto 2002.
- PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: *El conflicto, callejón con salida*. Bogotá, PNUD, 2003.
- Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, 2004, "Actores primarios del conflicto armado", Medellín, mimeo, 2004.
- \_\_\_\_\_, 2005, 24 de enero 2005, "Avances del proceso", Medellín, mimeo.
- Rangel, Alfredo (Editor), 2005, *El poder paramilitar*. Bogotá, Planeta, Fundación Seguridad y Democracia.
- Romero, Mauricio, 2003, *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*. Bogotá, Planeta, IEPRI.
- \_\_\_\_\_, 2005, La desmovilización de los paramilitares y las autodefensas: Riesgosa, controvertida y necesaria, Bogotá, Síntesis 2004. Anuario Social, Político y Económico, Fescol-IEPRI-Nueva Sociedad.
- Salazar, Alonso, Costelo, Paolo y López, Néstor Alonso, 1998, *Memorias de la historia y el proceso de paz de las milicias populares de Medellín*, Medellín, 1998.
- Uribe, María Teresa, "Antioquia: entre la guerra y la paz en la década de los 90", Estudios políticos, No. 10, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio de 1997.
- Valencia, León, 2002, *Adiós a la política, bienvenida la guerra: Secretos de un malogrado proceso de paz*, Bogotá, Intermedio.